

PUERTO MONTT, Marzo veinticinco de dos mil veintidós.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, los días catorce y quince recién pasados, ante esta segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, constituido por los jueces titulares don Francisco Javier del Campo Toledo, quien la presidio, don Andrés Villagra Ramírez y don Jaime Rojas Mundaca, se llevó a efecto la audiencia de Juicio Oral, en la causa Rol Interno N°82-2021, seguida en contra de **EXCEQUIEL GONZALO BARRIA BARRIA**, chileno, natural de Puerto Montt, sin apodos, sin nombres supuestos, cédula nacional de identidad N°8.461.040-2, nacido el 21 de Septiembre de 1959, casado, 62 años de edad, lee y escribe, carpintero, domiciliado en calle Puerto San Carlos N°4643, Altos de Mirasol, de esta ciudad.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto don Jorge Raddatz Hernández, y la acusación particular por la parte querellante de Yanina Valeria Díaz Ruiz, estuvo representada por el abogado don Sergio Coronado Rocha.

La defensa del acusado Barria Barria, estuvo a cargo del defensor penal privado don Andrés Firmani Garrido.

La audiencia de juicio oral, se realizó por sistema de video conferencia bidireccional sincrónica en la plataforma ZOOM, ID: N°93697286937, contraseña N°921477, sin que se verificaran objeciones de orden jurídico ni tampoco se sufrió de imperfecciones de orden técnico que impidieran el normal desarrollo de la misma.

Acusación

SEGUNDO: El Ministerio Público y la parte querellante, de acuerdo al auto de apertura de este juicio oral, determinaron su imputación al siguiente tenor:

“El día 21 de julio del año 2019, cerca de las 4:00 horas de la madrugada, el acusado Excequiel Gonzalo Barria Barria, ya individualizado, condujo el vehículo marca Samsung modelo SM3 patente CJDY-35, por Avenida Presidente Ibáñez, en la ciudad de Puerto Montt, en estado de ebriedad, a una velocidad no inferior a 63 km por hora, y sin ir atento las condiciones actuales de tránsito, por lo cual al llegar a la altura de Calle República no advirtió la presencia y proximidad del vehículo marca Daewoo, modelo Lanos, patente VH-8595, quien lo antecedió colisionando por alcance, atropellando en consecuencia a las víctimas Soledad del Carmen Ruiz Baldovinos y Sergio Hernán Díaz Mancilla, quienes se encontraban traccionando dicho móvil.

A raíz de lo anterior la víctima Soledad del Carmen Ruiz Baldovinos falleció producto de un politraumatismo esquelético y visceral, lesiones recientes vitales necesariamente mortales compatibles con atropello.

Mientras que la víctima Sergio Hernán Díaz Mancilla, resultó con lesiones graves consistente en Tec grave Scalp cuero cabelludo, politraumatismo enfisema pulmonar de predominio apical con bulas, quedando ésta postrada, sin poder valerse por sí mismo, sin pleno uso de sus facultades mentales.

Al hacerse presente los funcionarios de carabineros constataron el estado de ebriedad del acusado por su fuerte aliento alcohólico, rostro congestionado, incoherencia la hablar, practicado el examen respiratorio registro 1,09 G/L alcohol de la sangre, mientras que la alcoholemia arrojó como resultado 1,48 G/L en la sangre.”

Acusadores

TERCERO: Los acusadores sostuvieron en sus alegatos de apertura que con los medios y elementos de prueba incorporados en la audiencia de juicio, lograrían acreditar – más allá de toda duda razonable- su imputación y en consecuencia, que el acusado es autor de los hechos atribuidos en la acusación fiscal, que resultan constitutivos, de un delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte y lesiones graves gravísimas, descrito y sancionado en los artículos 196 en relación con el artículo 110 inciso segundo de la ley N° 18.290 de Tránsito. Requiere en esta consideración, el Ministerio Público, reconociendo que favorece al acusado la atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 11 N°6 del sustantivo, se le imponga la pena única de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales previstas en el artículo 28 del Código Penal, Multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales e inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, además del Comiso del vehículo “señalado en los hechos de la acusación” y el pago de las costas de la causa. En el caso del acusador particular, sin reconocer modificatoria de responsabilidad alguna demanda se imponga al acusado la pena única de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, y una Multa de 20 Unidades

JAIME ANIBAL ROJAS MUNDACA
Juez oral en lo penal
Fecha: 26/03/2022 12:56:13



Tributarias Mensuales, coincidiendo en todo lo demás con las peticiones sancionatorias del acusador institucional.

En sus alegaciones de clausura, los acusadores estuvieron de acuerdo en que desde su perspectiva habían logrado establecer más allá de toda duda razonable los hechos atribuidos y en tal medida mantuvieron las peticiones formuladas en el inicio del juicio.

En la audiencia de determinación de pena, requirieron se imponga al acusado las penas solicitadas en la acusación, pidiendo se rechace la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal alegada por la defensa, y que en caso de rebajarse la sanción, no se sustituya la pena por ninguna de las que prevé la ley 18.216.

Defensa

CUARTO: La defensa del acusado demandó la absolución de su representado a título de autor del delito de Conducción de Vehículo Motorizado causando muerte y lesiones, demandando se le condene como autor de un delito de Conducción de Vehículo Motorizado simple. Fundamenta su petición, en el presupuesto fáctico que las infracciones reglamentarias que determinan la muerte y lesiones de las víctimas, fueron cometidas por ellas mismas, pues su atropello no se verifica o tiene por motivo la conducción en estado de ebriedad de su representado, sino que en razón a que ambos empujaban un vehículo motorizado por la calzada, sin luces ni advertir de su presencia en el camino, por lo que más que anteceder a su defendido, le obstruyeron el camino, desde que su presencia representaba un obstáculo en la mitad de un camino oscuro, sin luminosidad adecuada, con fuerte lluvia y escasa visibilidad. En subsidio requiere se recalifiquen los hechos, y se condene a su representado en calidad de autor de un delito de Conducción de Vehículo Motorizado simple, en concurso con un delito culposo de homicidio y lesiones graves.

En correcta relación con la defensa técnica, en la oportunidad prevista en el artículo 326 del procesal, como medio de defensa, y renunciando a su derecho a guardar silencio, **Excequiel Gonzalo Barría Barría**, prestó declaración en la sala virtual, indicando en lo pertinente, que en la madrugada del día 21 de Julio de 2019, alrededor de las 04:00 horas, en circunstancias que conducía el vehículo marca Samsung, modelo SM3, placa patente CJDx-35, por avenida presidente Ibáñez, en dirección a su domicilio que se ubica en la población Modelo, al pasar Homecenter Sódima, comenzó a llover muy fuerte, lo que disminuyó la visibilidad, y al pasar el paso sobrenivel que existe sobre calle Petorca, y enfrentar la recta que hay en el lugar, por la misma pista en que el transitaba, vio como una muralla al frente, puso entonces las luces altas, freno y en un lapso de segundo vio lo que pasó. Recuerda que se tomó la cabeza con las manos, y quedó en estado de shock. Recuerda que al frenar el auto derrapó. Detalla que en la ocasión habían concurrido a la localidad de Alerce a una celebración en la cual se tomó cuatro cervezas, y casi al venirse un pisco sauer, que pretendieron regresar en Uber, pero no habían, y por ello decidió manejar no más. Agrega que en el vehículo viajaba su cónyuge <<RESERVADO>>, como copiloto y atrás sus hijos. Afirma que en lo personal no sabe cómo explicar lo que sucedió. Refiere que “*son una familia normal, un hogar constituido con hijos y nietos, nunca han tenido esa cosa de pensar mal, de hacer algo malo, siempre han sido una familia de bien.*” Indica que es una persona de esfuerzo, de clase media baja, que en su casa ha podido trabajar. Hoy en día tiene un trabajo. Esto le ha tocado como familia, les ha afectado, para ellos ha sido muy difícil. Afirma que lo siente, pide disculpas a quien corresponda. Refiere que tiene una licencia profesional A-2, ‘porque lleva 40 años conduciendo. Refiere que el trayecto en que ocurrió el accidente lo realiza en forma habitual pues se trata del camino que lo lleva a su domicilio.

Contrainterrogado por la defensa, indicó que el vehículo que estaba delante de él, estaba detenido, las víctimas lo estaban empujando, vio a las personas, lo que le llamó la atención, es que la persona que iba detrás del vehículo, tenía ropa de invierno con una capucha, y supone que no escuchó el ruido de su vehículo, porque la señora en ningún momento advirtió que viniera algo atrás. Señala que el vehículo que empujaban las víctimas, no tenía intermitentes, ellos no llevaban nada de luz o reflectante, la luz trasera tiene un punto reflectante, pero la persona estaba parada justo tras ella, obstaculizando la visión de ese ojo que da la luz trasera. Acota que después del choque se bajó a asistir a los lesionados, estacionando su vehículo a un costado con los intermitentes, para ver que podía hacer, y auxiliar a la señora, en esos momentos el vehículo que venía de frente se detuvo al lado, puso sus intermitentes también. Carabineros llegó casi a los dos minutos, los carabineros se bajaron y le preguntaron qué había pasado, por lo que conversó con los carabineros de inmediato, y les dijo que chocó un auto, el carabinero atendió a la persona, y el carabinero le preguntó que auto chocó, diciéndole que no veía ningún auto, pero lo comenzaron a buscar, encontrándolo

JAIME ANIBAL ROJAS MUNDACA
Juez oral en lo penal
Fecha: 26/03/2022 12:56:13



varios metros más adelante tras un quiosco. Refiere que desde el cruce de Petorca hasta el lugar de la colisión debe haber unos 50 metros y que le hicieron la alcoholemia en el SAPU.-

En sus alegaciones de clausura, reiteró los argumentos expuestos en la apertura y sostuvo su tesis principal y subsidiaria, dando cuenta del informe pericial sobre accidentes de tránsito en que la sostiene.

En la audiencia de determinación de pena, requirió se le reconociera a su defendido la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N°9 del sustantivo, además de la irreprochable conducta anterior, y conforme a ello se asigne una penalidad que transite el presidio menor en su grado máximo y que la pena corporal le sea sustituida por la libertad vigilada intensiva, incorporando informes sociales a dichos efectos.

Aspectos debatidos

QUINTO: Que teniendo en consideración las alegaciones y teorías del caso de la defensa material y técnica, no son aspectos discutidos por éstos, la graduación alcohólica ni la velocidad con que el acusado conducía el móvil, ni por cierto las condiciones de tránsito, en que ocurrieron los hechos, lo único que discute la defensa, es que la causa del accidente se debe a que las víctimas quebrantando varias reglas de la ley del tránsito, crearon un riesgo no permitido, que determinó los resultados lesivos que se le atribuyen a su representado. En forma principal indica que no es posible en una noche con lluvia, en una zona de visibilidad escasa empujar un vehículo motorizado, sin luces, sin chalecos reflectantes, y sin ninguna advertencia del peligro implicado en las acciones que estaban ejecutando. Y conforme a ello, tal como lo expresa la prueba pericial que incorpora, el accidente no pende del estado de ebriedad ni de la conducción a exceso de velocidad del conductor, sino del riesgo asumido por las víctimas que sufrieron las consecuencias de los hechos.

Solo acotar en esta parte que la teoría del caso de la defensa puede ser reconducida a una concurrencia de dos o más conductas imprudentes causales, eventualmente creadoras de un riesgo, que obliga a estos juzgadores a determinar, en sede relación de riesgo, a quién le resulta imputable las consecuencias típicas producidas.

Aspectos procesales

SEXTO: Que en el desarrollo de los aspectos procesales como sustantivos del juzgamiento que se verificarán en lo sucesivo, se hablará de conceptos como **elemento** y **medio** probatorio, fundamentación probatoria descriptiva y valorativa o intelectual, prueba de cargos, credibilidad o veracidad subjetiva y objetiva, entre otros, todos bajo el prisma del “contradictorio” que gobierna el sistema.

Desde la perspectiva que se advierte, resulta indispensable entonces, consensuar a priori que la prueba de cargos debe ser correctamente analizada bajo los imperativos que consagra el artículo 297 del Código Procesal Penal, acotándose que toda sentencia condenatoria deriva necesariamente de la convicción - más allá de toda duda razonable - que adquieran los juzgadores, que se ha cometido el hecho punible, y que en ellos ha correspondido al acusado participación en la forma que le es imputada en la acusación fiscal, requisitos copulativos indispensables, para derribar la presunción de inocencia que le ampara.

Que el contenido normativo ya indicado, exige como requisito ineludible a los juzgadores, que toda la fundamentación fáctica que formulen, posea su correspondiente correlato probatorio, el que, solo a pretexto sistematizador, podríamos dividir, en fundamentación probatoria descriptiva e intelectual, pudiendo aceptar como ***fundamentación probatoria descriptiva***, aquella que nos obliga a señalar en la sentencia, uno a uno los medios probatorios conocidos en el debate, valga entender como ***medio probatorio*** al testigo, perito, documento o evidencia material, a diferencia del ***elemento probatorio*** que corresponde a la información que entrega *el medio* y que sirve al juez para llegar a una conclusión determinada.

Lo que se viene señalando determina como obligación, describir en la sentencia, el contenido del medio probatorio, obviamente, que en sus aspectos más relevantes y pertinentes, sin valorarlo aún; esta forma de construcción en la estructura del fallo, es lo que determina la denominación de fundamentación probatoria descriptiva a la que se alude.

Por su parte la ***fundamentación probatoria intelectual***, importa la valoración de los distintos medios de prueba, valoración que debe seguir, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, como lo consigna el artículo en mención. La fundamentación probatoria descriptiva, resulta relevante a



propósito de controlar la fundamentación probatoria intelectual, que en caso de faltar o de alterarse las reglas de valoración, importaran la nulidad de la sentencia.¹

Que a propósito de un correcto entendimiento de los parámetros que se vienen utilizando y que se utilizarán en lo sucesivo en la valoración de los medios de prueba, debemos advertir, que es en el ámbito a que se hace referencia, en el que debe buscarse la credibilidad objetiva y subjetiva de cada uno de los relatos de los testigos que comparecieron en audiencia, debiendo entenderse entonces, por **credibilidad subjetiva**, los aspectos y objeciones que recoge a título ejemplar el inciso primero del artículo 309 del Código Procesal Penal, esto es, que a los deponentes no les muevan sentimientos de animadversión u otros móviles abyectos respecto del acusado, como tampoco sentimientos de amistad o de favorecimiento en relación a su persona, o bien, independiente a ambas alternativas, que dichos testigos tengan tendencias fabuladores, falencias de memoria reciente o remota, u otras características que afecten esencialmente la idoneidad de su narración.

Unida indisolublemente, a este primer predicado, se encuentra el concepto de **credibilidad objetiva**, requisito insoslayable, que deviene palmario del inciso segundo de la norma en referencia, la que al exigir que *"todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarar, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas."*; amén de clasificar a los testigos en presenciales, expertos y de oídas, no hace sino requerir que sus narraciones, no se aparten de la lógica, la ciencia, ni las reglas de las máximas de la experiencia en sus apreciaciones, esto es, ni más, ni menos, que hayan podido percibir, lo que afirman haber visto, oído o inferido, desde el lugar, tiempo y circunstancias que refieren.

Registro del juicio

SEPTIMO: En correcta consonancia con lo inmediatamente expuesto, es necesario enfatizar, que a efectos de determinar el irrestricto cumplimiento del deber de motivación contenido en los artículos 297 y 342 letra c) del procesal –que constituye una garantía para todo justiciable, pues está relacionado directamente con el derecho a defensa, a la prueba y el derecho al recurso²- se precisa delinear **que entendemos por fundamentar**, excluyendo desde ya, aquella interpretación reduccionista que lo asimila, erradamente -a nuestro juicio- a la simple transcripción de la prueba rendida, aun cuando ésta sea completa.

Así puede afirmarse que los tribunales de instancia tienden, a fin de no infringir el mandato legal, contenido en las normas aludidas, a realizar una larga y detallada transcripción de lo declarado por testigos y peritos en la audiencia de juicio oral, entendiendo que de esta manera, lo resuelto se reviste de un blindaje que le hace infiscalizable a los recursos procesales; más, categóricamente podemos sostener que **la valoración de la prueba** –es decir aquel proceso de naturaleza cognoscitiva que utiliza el método inductivo, en que aplicando a determinado enunciado de contenido fáctico una generalización o máxima de experiencia, debe concluirse corroborando o refutando el enunciado o la hipótesis- no puede confundirse ni asimilarse al mecanismo de plasmar en el fallo lo que cada uno de los peritos o testigos declaró en el juicio oral.

Es necesario entonces, dejar en claro en torno al contenido de la exigencia de motivación que *"la apreciación probatoria no se satisface, sin embargo, con una mera descripción del resultado de las pruebas practicadas, lo que tendría lugar si la sentencia se limitara a declarar, por ejemplo, que 'el testigo dijo...'. La motivación no debe traducirse en una actividad meramente descriptiva, ni tampoco en una simple remisión genérica y formal al conjunto de la prueba practicada..."*³. Sobre esto mismo es categórica Accatino al señalar que *"tampoco se satisface la responsabilidad de motivar a través de un estilo que omita toda justificación de la valoración de la prueba y que intente camuflar ese vacío a través de abultadas partes expositivas, en las que se transcriben las actuaciones fundamentales del proceso"*⁴.

¹ Dall'Anese, Francisco: *Falta de fundamentación de la sentencia y violación de reglas de la sana crítica* en <http://www.cienciaspenales.org/revista6f.htm>, revisado el 25 de marzo de 2022, a quien hemos seguido libremente.

² Cfr. Ferrer, J. Derecho a la prueba y "Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales", *Rev. Jueces para la democracia*, n. 47, julio, 2003. pp. 54 y ss. y del mismo autor *La valoración racional de la prueba*. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2007 pp. 56 y ss.

³ Miranda, M. *La mínima actividad probatoria en el proceso penal*, José María Boch Editor, Barcelona, 1997, pp. 171.

⁴ Accatino, D. "La publicidad de las razones judiciales", en Romero, A. (coord.), *Estudios de derecho en homenaje a Raúl Tavolari Oliveros*, Ed. Lexis Nexis, Santiago, 2007, pp. 593.



Dentro de esta tendencia es claramente mayoritaria la situación en que se anula la sentencia del tribunal de juicio oral por ser ostensible la omisión de valoración de algún o de algunos de los medios de prueba que las partes rinden en el juicio oral. En efecto con recurso a la literalidad del inciso segundo del artículo 297 del procesal se controla que la sentencia recaiga sobre “*toda la prueba producida incluso aquella que se hubiere desestimado*” reduciendo la motivación o fundamentación, a un trabajo cuantitativo consistente en transcribir toda las pruebas personales rendidas y la fiscalización a pesquisar la ausencia de aquél medio de prueba que no fue valorado o simplemente transcrito, sin atender a criterios de relevancia ni al principio de congruencia.⁵

Es importante, para excluir que la interpretación del deber de fundamentación se extienda a la “copia” de todo lo dicho u obrado en el juicio oral, determinar que el contradictorio es lo que debe iluminar a los sentenciadores a la hora de motivar sus conclusiones probatorias, bajo el amparo y complemento del principio de presunción de inocencia y de la obligación del Estado de superar el estándar de prueba, que permita afirmar que tal presunción, ha sido derrotada, ello a fin de dotar de un correcto contenido, al deber de motivación y no extenderlo *ad infinitum*.

En efecto junto con adelantar, como se viene haciendo, **que no se transcribirán audios**, pues el registro del juicio no es la sentencia según se desprende de los artículos 41 y siguientes del procesal, amén de todo lo que ya se ha indicado, tampoco se motivará sobre todas las cuestiones periféricas que no formaron parte del contradictorio, como por ejemplo el color del vehículo del Servicio de Atención Médica de Urgencia, o la ropa que vestía la víctima esa tarde, entre otras, desde que dicha labor infinita es imposible de realizar, y por lo demás, no constituye una tarea que el legislador haya impuesto, ni pretenda desarrollar este redactor, y solo puede abrigar su entendimiento en aquellos operadores del sistema que jamás han realizado una interpretación sistemática del mismo. La sanción de nulidad por estas razones, bien vale la pena en este noble sistema, y serán otras generaciones las que logren entender el real sentido de las normas en juego.

No parece controvertir lo que se viene afirmando, en orden a lo innecesario que resulta la transcripción de los audios del juicio, lo sostenido por la Corte Suprema en el fallo del llamado “*caso Tocornal*”, al postular la tesis que la transcripción íntegra de la prueba no era un requisito exigido por la ley, o a estricta literalidad: “... *en dicho mérito, y del tenor del extenso fallo que ha precedido a la decisión de los sentenciadores, quienes incluso como plus han transcrito las diversas actuaciones llevadas a efecto en la audiencia, sin que ello sea una exigencia de las estrictamente necesarias que señala el artículo 342 del Código Procesal Penal*...”⁶

Fundamentos doctrinarios

OCTAVO: Que si bien es cierto, en este juzgamiento, la doctrina no ha ocupado un lugar preponderante al momento de decidir, desde que el asunto se inclina en forma principal desde el *factum* del asunto, más que en lo normativo, de igual modo, se ha realizado –no puede ser de otro modo– una interpretación dogmática de las instituciones en juego, considerándose a todo evento, los principios que impone el vivir en un Estado Social y Democrático de Derecho, como la racionalidad funcional del Derecho penal, y la interpretación dogmática a la que se alude, se ha verificado a la luz de dichos principios y funciones, al amparo de los autores, que desde nuestra perspectiva, suponemos de mejor y moderna doctrina, alternativa a la que nos encontramos autorizados, en principio por que el ejercicio del *ius puniendi*, no se agota en la ley, y porque sus límites son extra e intrasistémicos, según el desarrollo sucesivo.

En efecto, el requisito impuesto a la sentencia, según lo previsto en la letra d) del artículo 342 del procesal, esto es, “*Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo*”, ha sido entendida por los autores –en forma prácticamente unánime– como la posibilidad de recurrir al momento de fundar la decisión, no sólo a la ley, sino que igualmente a otras fuentes

⁵ La Corte Suprema ha señalado respecto a este punto que “...el Estado tiene la carga de demostrar en grado de certeza todos los extremos de la imputación delictiva, o sea, todos aquellos hechos que, individualmente o en su conjunto, permiten establecer los ingredientes del delito o, por el contrario, cuestionarlos. Vale decir, si consideramos que la pretensión punitiva ha de concretarse, en cada caso, en la imputación de uno o más hechos que, con arreglo a la ley penal sustantiva configuran un determinado delito, serán hechos relevantes o pertinentes aquellos que acrediten o excluyen la presencia de los componentes del delito, la participación culpable del hechor y las circunstancias modificatorias de su responsabilidad criminal, comprendidas en la acusación”. Sentencia de la Corte Suprema de fecha 26 de enero de 2009, Rol N° 5898-2008.

⁶ Sentencia de la Corte Suprema de fecha 17 de enero de 2007, Rol N° 6.112-06.



del Derecho. Así, solo a título ejemplar, se puede referir a Andrés Baytelman⁷ en cuanto sostiene que “...la sentencia debe hacerse cargo del derecho aplicable al caso: El derecho aplicable al caso es de dos tipos: en primer lugar, el tribunal debe resolver el derecho atingente precisamente a la dilucidación de los hechos probados. En este sentido las reglas de procedimiento y las reglas que hacen el razonamiento judicial tiene mucho que decir, pues cuando el juez está optando por conceder credibilidad a una prueba por sobre otra, confluyen en dicha opción un conjunto de normas jurídicas que el juez debe aplicar. Así, por ejemplo cuando aplica normas jurídicas para excluir prueba ilegítimamente obtenida, cuando resta credibilidad a una prueba por contradecir las reglas de la lógica, el conocimiento científicamente afianzado o las máximas de la experiencia o, en fin, cuando estima que la prueba del Ministerio Público no ha satisfecho el estándar de prueba que requiere la convicción judicial (...) En segundo lugar está el derecho de fondo. No se trata simplemente – como ha dicho tradicionalmente el obsoleto modelo del silogismo judicial- de la mera aplicación de un silogismo lógico para subsumir los hechos probados a una norma específica. La norma en cuestión no es sólo el texto escrito que se posa ante nuestros ojos en la ley penal. Lejos de eso, la norma sustantiva que debe aplicar el juez está integrada tanto por el texto legal como por la mejor interpretación que de dicho texto el juez pueda hacer a la luz de los principios y valores del Estado de Derecho, los fines previstos en dicha norma y de los fines previstos para el sistema penal en su conjunto. Esta visión del derecho no es antojadiza –de hecho uno la puede encontrar en autores de la talla de Dworkin- y pone al ordenamiento jurídico al servicio de los fines para los que fue concebido, urgiendo a los jueces a desarrollar permanentemente elaboraciones interpretativas para ir adecuando las normas a una realidad en constante cambio y complejización, tanto valórica como fáctica. Esta forma de concebir el Derecho modifica entonces la actividad del juez de cara a la aplicación del derecho, invitándolos a abandonar la mera aplicación literal y automática del texto de la ley”.

Lo que se viene sustentado se encuentra reforzado normativamente con lo que previene el artículo 373 letra b) del cuerpo de leyes citado, pues consagra como causal de nulidad la errónea aplicación del derecho en el pronunciamiento del fallo, por lo que se incluyen otras fuentes del derecho como la Constitución Política, los Tratados Internacionales, los Principios Generales y la Doctrina. Así se ha sostenido por los autores nacionales -entre los que se cuenta a Julián López⁸- y se señaló en la tramitación parlamentaria al consagrarse el actual código de enjuiciamiento penal.⁹

La impresión que se viene relacionando, también parece ser compartida por el Excmo. Señor Ministro don Sergio Muñoz, cuando afirma: “...en cuanto a la causal invocada, es posible efectuar alcances a las expresiones “*errónea aplicación del derecho*” y “*materia de derecho*” usadas por el legislador procesal penal, que marcan diferencia, pero que se inscribe en una tendencia legislativa, por la que se hace referencia al “derecho” y no a la “ley”. A la hora de extraer consecuencias jurídicas, corresponde entender que la referencia al “derecho” ha tenido por objeto ampliar las Fuentes del Derecho que son parámetro de control de la actividad jurisdiccional, aspecto que resulta más evidente conforme a una interpretación armónica y sistémica con la causal prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, puesto que de esta forma guardan perfecta correspondencia ambas causales. Es así que se torna relativa la importancia de la jerarquía y naturaleza de las Fuentes del Derecho que se afecten, incorporando sin duda, el ordenamiento nacional e internacional, como los Principios Generales del Derecho. En lo que se refiere al ordenamiento interno se encontrará incorporado el sustento constitucional y legal, puesto que en ellos queda radicado el principio de legalidad. Ya no es posible reducir la identificación entre derecho y ley, visión positivista que ha costado tanto remontar a nuestra cultura nacional.”¹⁰

⁷ Baytelman, A. “La fundamentación de la sentencia en el juicio oral”, VV.AA. Nuevo proceso penal, Ed. Jurídica Conosur Ltda., Santiago, 2000, pp. 294.

⁸ Horvitz, M. y López, J. Derecho Procesal Penal Chileno, Ed. Jurídica, Santiago, 2004. pp. 427.

⁹ Pfeffer, E. Código Procesal Penal, Anotado y concordado, Ed. Jurídica, Santiago, 2001, pp. 369.

¹⁰ Fallo de fecha 26 de noviembre de 2008, Recurso de nulidad rol N° 5420-2008, Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, agregando el referido a continuación: “...Si se hace una breve recapitulación de los antecedentes del establecimiento de esta causal en el ordenamiento jurídico nacional se podrá observar, que el artículo 940, actual 767 del Código de Procedimiento Civil, dispuso originalmente: “El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infracción de ley, siempre que esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia”; norma que deriva del artículo 971 del proyecto de José Bernardo Lira de 1884, que está directamente relacionado con el artículo 772, que impone hacer mención a la ley o leyes infringidas en el escrito de formalización; la Ley 3390 exige indicar “la forma en que se ha producido la infracción y de la manera como ésta influye en lo dispositivo del fallo”; la Ley 19.374 introduce la noción de “error de derecho”, con el propósito de dar mayor amplitud al recurso e impedir fueran declarados inadmisibles



Que por lo demás, a nivel de tratamiento procesal -en quizás la más importante modificación legal en dos siglos- esta forma de interpretación, es elevada al rango de principio básico, según puede leerse en el numeral 2 del mensaje del Ejecutivo al Congreso Nacional y con el cual se acompañó el proyecto de ley que en definitiva dio origen al Código Procesal Penal, el que en lo pertinente señala, *"Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos, relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas."* Tan elocuente manifestación de voluntad, por cierto no puede, ni pretende ser desoída por estos juzgadores, y conforme a ello, se ha decidido en lo pertinente.

Bien jurídico protegido

NOVENO: Aunque no existe unanimidad doctrinaria al respecto, estimamos que no incurrimos en error, si afirmamos que el bien jurídico protegido, -al menos para aquellos que creen en la teoría del bien jurídico-¹¹ - en el **delito de Conducción, Operación o Desempeño de Vehículo Motorizado en Estado de ebriedad, es la seguridad en el tráfico rodado o la seguridad en el tráfico vial**. En este parámetro, constituye una tesis mayoritaria que el ilícito contemplado en el inciso primero del artículo 196 de la ley 18.290, tiene la naturaleza jurídica de un delito de peligro abstracto y de mera actividad. Sin embargo, las hipótesis que contemplan los incisos segundo y tercero de dicha normativa, y que consagran el llamado delito de **Conducción, Operación o Desempeño de Vehículo Motorizado en Estado de ebriedad causando lesiones o muerte**, constituyen hipótesis de delitos de peligro concreto y de resultado, y que en el caso que nos ocupa transforma al ilícito en una figura pluriofensiva que atenta en contra de dos bienes jurídicos la seguridad en el tráfico rodado, la salud individual y la vida.

Recordemos que en los delitos de peligro en concreto, se requiere expresamente la creación de una efectiva situación de peligro (resultado de peligro), mientras que en los delitos de peligro abstracto, no es preciso que la acción cree un peligro efectivo. Así, solo serían delitos de esta naturaleza, porque la razón de su castigo es que normalmente suponen un peligro. En los delitos de peligro concreto, el tipo requiere como resultado de la acción la proximidad de una concreta lesión (en rigor, que la acción haya estado a punto de causar una lesión a un bien jurídico determinado). En los delitos de peligro abstracto, no se exige tal resultado de proximidad, sino que basta la peligrosidad de la conducta, peligrosidad

en su análisis en cuenta. El legislador mantiene la referencia a tales normas en el Código de Procedimiento Penal. Es así como el concepto de "error de derecho" será recibido por el Código Procesal Penal en la norma que contempla la causal y se exige, en el artículo 378 del Código Procesal Penal, al recurrente que interpone el recurso de nulidad consignar "los fundamentos del mismo y las peticiones concretas". Es así como, las mayores exigencias del recurso se mantienen referidas al tribunal que conoce y decide el recurso y no al libelo del recurrente por el que se interpone, separando nítidamente los requerimientos a satisfacer por la parte y aquellos que debe cumplir el tribunal que decide la impugnación."

¹¹ De una opinión contraria en torno a la teoría del bien jurídico se manifiesta Gunther Jakobs, en ¿qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? pp. 28 y 29, Ediciones Jurídicas Cuyo, argentina 2001, comentado por Carlos Parma, es de una opinión contraria, al estimar que aunque mayoritariamente la doctrina dominante entiende que el Derecho Penal protege bienes, y que éstos serían preexistentes al Derecho, (como la vida, o la propiedad), prontamente se constata que hay bienes jurídicos que no le interesan al Derecho Penal, citando como ejemplo; la muerte natural, o la destrucción de un bien inmueble por un aluvión. Llevado al caso concreto, Jakobs, señala que la muerte por senectud, es la pérdida de un bien, pero la puñalada del asesino es la lesión de un bien jurídico. De lo anterior deviene que el Derecho Penal, no es apto para la protección genérica de bienes, sino para la protección contra ciertos ataques. Particularizando como conclusión que el derecho penal garantiza la vigencia de la norma, no la protección de bienes jurídicos. Esto resulta claro, si se considera que el derecho penal, no es un muro de protección puesto alrededor de los bienes, sino que es la estructura de la relación entre personas, por lo que el derecho punitivo como protección de bienes jurídicos, significa que una persona, encarnada en sus bienes, es protegida frente a los ataques de otra persona. De este modo se ha de entender que lo garantizado es la expectativa de que no se producirán ataques a bienes (por ejemplo, el titular, puede autorizar la destrucción de la propiedad. Fluye necesario entonces, que el bien NO ha de representarse como un objeto físico, sino como norma, como expectativa garantizada, pues el derecho penal, es una relación entre personas, y no puede representarse como un objeto físico.



que se supone inherente a la acción, salvo que se pruebe que en el caso concreto quedó excluida de antemano.¹²

La función político criminal de los delitos de peligro en abstracto es la de no dejar a juicio de cada cual la estimación de la peligrosidad de las acciones que con frecuencia son lesivas, como el caso que nos ocupa en que según se afirma la abstracción del peligro está determinada por una cuestión estadística.

Tipo penal

DÉCIMO: La figura del delito de Conducción, Operación o Desempeño de Vehículo Motorizado en Estado de ebriedad, se consagra en el inciso primero del artículo 196 de la ley 18.290, esto es, *“El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, además de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años, si fuese sorprendido en una primera ocasión, la suspensión por el término de cinco años, si es sorprendido en un segundo evento y, finalmente, con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete días.*

Mientras que el inciso tercero de dicha regla señala que *si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1° del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo, en el primer caso, y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en el segundo. En ambos casos, se aplicarán también las penas de multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales, inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal.*

Se debe hacer presente en esta parte que los incisos tercero y cuarto del artículo 196 del estatuto procesal, importan figuras cuya naturaleza responde en doctrina, a los denominados **delitos calificados por el resultado**, en cuanto su punibilidad exige expresamente el acaecimiento de un resultado, que tiene un efecto agravatorio en relación a la penalidad asociada al delito base, lo que obliga a considerar al menos dos aspectos relevantes a propósito de los presupuestos generales de punibilidad. Desde el punto de vista del tipo objetivo, la punibilidad requiere satisfacer las **exigencias de causalidad e imputación objetiva** entre el resultado y la conducta del autor. Ello implica, p. ej., que no hay responsabilidad por la producción del resultado calificante si su acaecimiento es imputable a una autopuesta en peligro de la propia víctima, o responde a un riesgo no creado por el autor y desde el punto de vista subjetivo, la punibilidad requiere satisfacer las exigencias del **principio de culpabilidad**, lo que a su vez exige **imputación subjetiva a título de culpa del resultado causado**, no aceptándose, en consecuencia, responsabilidad penal por el mero caso fortuito.¹³

De tal suerte que a propósito de tener por concurrente el tipo penal objetivo atribuido a los acusados, se deberá acreditar a priori y en forma suficiente, de acuerdo al estándar consagrado en los artículos 297 y 340 del procesal, que el día y hora en que ocurrieron los hechos, conducían un vehículo motorizado en estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol, y haber ocasionado con dicha conducción las lesiones y muerte que se les atribuyen.

Se debe advertir desde ya que el acusador logró confirmar su hipótesis acusatoria respecto del acusado, según el desarrollo sucesivo.

UNDÉCIMO: Que el compromiso epistemológico del proceso penal exige determinar la veracidad de lo sucedido, con la más alta probabilidad posible, para lo cual se deben confrontar las hipótesis explicativas de los hechos con los datos probatorios existentes.

Con el fin de dar la primera mirada al caso, los acusadores integran a la audiencia, el testimonio del funcionario de carabineros **Juan Andrade Toledo**, quien en lo

¹² **Mir Puig**, Santiago: Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, editorial BdeF 8ª. edición – 2008, pp.230 y ss.

¹³ **Mardones Vargas**, Fernando y **Ramos Pérez**, Cesar: Análisis de las modificaciones introducidas por la ley 20.770 (Ley Emilia) a la ley del Tránsito y al DL N°321- Departamentos de Estudios y Proyectos Defensoría Penal Pública, Diciembre de 2014.-



pertinente indicó que en circunstancias que se encontraba de servicio en la población en la madrugada en que ocurrieron los hechos, esto es, el 21 de julio de 2019, alrededor de las 04:00 el jefe de turno les llamó a propósito que se constituyeran en Avenida Presidente Ibáñez, con calle Republica pues había ocurrido un accidente de tránsito. Al llegar, apenas unos minutos después del llamado y de ocurrido los hechos, pudo ver a la gente del Samu prestando atención a Sergio Díaz Mancilla, en tanto, en el suelo yacía una mujer de nombre Soledad del Carmen Ruiz Baldovinos, según les informó personal de dicha repartición. Con estos antecedentes, aislaron el sitio del suceso, cerrando con conos y quedándose en su resguardo. Afirma que en la oportunidad se entrevistaron con la cónyuge del acusado, <<RESERVADO>>, quien verificó un relato en los mismos términos por el acusado en la oportunidad del artículo 326 del procesal. Agregando que en la ocasión en que sucedieron los hechos prestaron ayuda a las víctimas y que el móvil que chocaron se desplazó alrededor de 100 metros, deteniéndose en calle Victoria o 22 de Mayo, con evidentes daños. Refiere que personal del Samu, se llevó a Sergio Díaz, quedando la persona fallecida en el lugar. Indica que al acusado se le leyeron los derechos y se pidió ayuda para llevarlo a hospital a constatar lesiones y tomar la alcoholemia que arrojó una dosificación de 1,9 gramos por mil. Afirma que él se quedó en el lugar resguardando el Sitio del Suceso. El vehículo chocado correspondía a uno marca Daewoo, modelo Lanos, patente VH-8595. El conductor acusado hablaba incoherencias, tenía un fuerte hálito alcohólico, y contestaba incoherencias al momento de contestar las preguntas, sin perjuicio de que igual se encontraba en shock. La calle en que ocurrieron los hechos, es presidente Ibáñez, alrededor están varios pasajes en el que ocurrieron los hechos, era pasaje República, el pavimento estaba mojado y había mucha lluvia, por lo que había baja visibilidad. Afirma que entrevistaron a un testigo, quien dijo que la persona fallecida estaba empujando el vehículo al igual que don Sergio quien estaba a la altura del conductor, empujando el vehículo con su puerta abierta, y allí fueron chocados por alcance. El pavimento estaba resbaladizo, había una fuerte lluvia, al entrevistar a doña <<RESERVADO>>, ella le menciona las mismas condiciones, dijo que no había una conificación, chalecos reflectantes, luces, ni nada. Refiere que, a ese tiempo, estaba vigente la regla del chaleco reflectante, y las víctimas no tenían puestos el chaleco reflectante. Recuerda haber entrevistado a don Mario Triviño, quien confirmó la misma dinámica, incluso menciona que el mismo automóvil estaba sin luces, y dijo que las puertas de ese vehículo estaban abiertas, en particular la puerta del conductor.

En la misma línea se incorporó también el testimonio de <<RESERVADO>>, quien en lo pertinente indicó que está citada a declarar por los hechos ocurridos el 21 de julio de 2019 alrededor de las 03:15 horas aproximadamente, oportunidad en que viajaba como pasajera en el vehículo conducido por su pareja el acusado en esta causa. Recuerda que asistieron a un cumpleaños en la comuna de Alerce, con sus hijos pequeños. Y alrededor de las 03:00 horas, decidieron venirse a Puerto Montt, pidieron un Uber, pero no llegó, por lo que debieron regresar a su domicilio en el vehículo que habían llegado y que corresponde al Samsung SM3, que en la ocasión condujo su pareja. Recuerda que en la oportunidad llovía mucho, y al bajar el puente del paso sobre nivel de calle Petorca por presidente Ibáñez, se encontraron con unas personas empujando un vehículo, no había un chaleco reflectante, nada, el auto no tenía luces, no se veía nada, aparte que las condiciones del tiempo fueron en su contra, y al frenar el vehículo igual impactó en contra de estas personas que empujaban el vehículo. Recuerda que en el cumpleaños su pareja bebió unas cervezas y un pisco Sauer y que al salir ya estaba lloviendo, en términos generales, la testigo reitera la versión de los hechos que entregara el acusado al momento de prestar declaración en los términos del artículo 326 del código adjetivo.

Con la misma pretensión se incorporó al juicio el testimonio de **Mario Enrique Triviño Andler**, quien indicó en lo pertinente, que sabe que está citado por un accidente, que ocurrió el 20 de julio de 2019, recuerda haber visto, el accidente, ya que en la ocasión en que este ocurrió. Conducía un vehículo en sentido contrario, condición en la que vio un automóvil plomo que venía con las puertas abiertas y hacia él, por lo que se orilló, y vio cuando ese auto chocó contra un quiosco y fue a parar junto a un disco pare. Recuerda que siguió su camino y allí vio un auto detenido y cuatro personas abajo mirando a otras dos que estaban en la berma, por lo que se detuvo para tratar de prestar ayuda. Recuerda que habló con el conductor y éste le dijo que las personas venían empujando el auto con las luces apagadas. Afirma que en esa noche había mucha lluvia, y poca visibilidad, recuerda que él manejaba a unos 60 kilómetros por hora. Refiere que el vehículo empujado por las víctimas, venía con la puerta abierta del conductor, circulaba por la pista contraria a la que él se desplazaba, no



llevaba intermitentes ni nada, estas personas que lo llevaban empujando no llevaban chalecos reflectantes tampoco. Señala que en el lugar en que ocurrió el accidente existe una berma muy ancha.

Con el propósito de acreditar los resultados atribuidos a las acciones ejecutadas por el agente, se incorporó el testimonio de **Yanina Valeria Díaz Ruiz**, quien en lo pertinente indicó que es hija de las víctimas, ellos sufrieron este accidente el 21 de julio de 2021, les avisó carabineros cerca de las 06:00 horas, que su madre estaba herida en un accidente de tránsito, y que fueran al hospital y allí en el hospital les dijeron que su madre había muerto. Y que su padre estaba grave. Indica que la última vez que habló con sus padres fue alrededor de las 22:00 horas en vísperas del accidente, oportunidad en que les dijeron que concurrirían a jugar a las máquinas de destreza, lo que hacían siempre, pero los días viernes, y ese día justo se fueron a jugar un sábado. Relata el accidente en los términos que se pudo apreciar en los videos y fue descrito por el perito Hernández. Afirma que su padre nunca despertó, de las lesiones que sufrió en el accidente, solo tenía espasmos, puede que haya estado lucido en su mente, pero quedo en estado vegetal, “se fueron” ese día los dos. Con el correr de los meses, su padre siempre fue empeorando, el ventilador que tenía se lo sacaron a las dos semanas, hasta que al final terminó respirando por el cuello, y después le pusieron una sonda para que pudiera alimentarse por el estómago. Recuerda que lo dieron de alta a los dos meses, ellos lo tuvieron en su casa, pero su situación era tan grave, que al final debieron internarlo nuevamente, y al llegar la pandemia lo trasladaron al hospital de Frutillar, recuerda que debió hacer diversos trámites, como la interdicción, y ese trámite se demoró un montón, su padre falleció el 25 de mayo de 2021, estuvo como dos años en esa misma situación, hasta que falleció en el hospital de Frutillar, sin nunca haber despertado. Refiere que sus padres antes de fallecer se veían felices como pareja, su madre era manipuladora de alimentos en un jardín infantil, en tanto su padre era electricista de automóviles. Expresa que se quedó muy sola, ha sido todo muy triste, todavía como que no se acepta que no estén sus padres y los extraña mucho.

No es una dimensión distinta en relación a este capítulo de la acusación la que entrega el testimonio de **Hardy Yonathan Villarroel Ruiz**, quien en lo pertinente indicó que sabe que está declarando por la muerte de sus padres. Indica que su padre quedó en estado vegetal, sin moverse ni nada, después de que ocurrió el accidente, permaneció internado en el hospital sin movimiento ni nada. Lo mandaron al hospital de Fresia y desde allí al hospital de Frutillar donde falleció.

Que de igual modo se incorporó, mediante lectura resumida, por el acusador, como **prueba documentales N°1**, en los términos del artículo 315 del Código Procesal Penal, el Informe de alcoholemia N° 6847/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, suscritos por el químico legista Javiera Delgado Gutiérrez, del Servicio Médico Legal de Valdivia. En el que consta que en la oportunidad en que sucedieron los hechos Soledad Ruiz Baldovinos, presentó una alcoholemia de cero coma cero gramos por mil de alcohol en la sangre; como **prueba documental N°2**, en los términos del artículo 315 del procesal, informe de alcoholemia N° 6747/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, suscritos por el químico legista Javiera Delgado Gutiérrez, del Servicio Médico Legal de Valdivia. En el que consta que en la oportunidad en que sucedieron los hechos Exequiel Gonzalo Barriá Barriá, presentó una alcoholemia de uno coma cuarenta y ocho gramos por mil de alcohol en la sangre; como **prueba documental N°3**, en los términos del artículo 315 del procesal, informe de alcoholemia N° 6430/2019, de fecha 21 de Enero de 2020, suscritos por el químico legista Javiera Delgado Gutiérrez, del Servicio Médico Legal de Valdivia. En el que consta que en la oportunidad en que sucedieron los hechos Sergio Díaz Mancilla, presentó una alcoholemia de cero coma cero gramos por mil de alcohol en la sangre; como **prueba documental N°4**, se incorporó el DAU N°1907007037 respecto de la Víctima Sergio Hernán Díaz Mancilla, en el que consta que el 21 de julio de 2019 a las 04:46 horas, ingresó al Servicio de Urgencia del Hospital Regional, con antecedente de paciente atropellado en la vía pública a alta energía, acompañante fallece, ingresa a box de reanimación en Glasgow 4 intubado; como **prueba documental N°5**, se incorporó el DAU del acusado N°16811979 en el que consta que fue atendido en el servicio de urgencia del Hospital Regional, dejándose constancia que no presentaba lesiones; como **prueba documental N°6**, se incorpora el Certificado de defunción de la víctima Soledad del Carmen Ruiz Baldovinos, en el que consta que bajo el N°843 del registro del año 2019, de la circunscripción del Registro Civil e Identificación de Puerto Montt, se inscribió el fallecimiento de la referida ocurrido el 21 de julio de 2019 a las 04:00 horas, en esta ciudad, por politraumatismo esquelético y visceral/atropello; como **prueba**



documental N°7, el certificado de Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo VH 8595-5; como **prueba documental N°8**, el Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del automóvil patente CJDx-35, marca Samsung, modelo SM3 1.6, año 2011, motor N°QG16332400; chasis N°KNMC4C2HMBP807032, color negro verde, y que según el Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, propiedad de Excequiel Gonzalo Barria Barria, RUN: 8.461.040-2, inscrito en el repertorio de la circunscripción de Puerto Montt, con fecha 11 de octubre de 2018, bajo el N°17007; como **prueba documental N°9** se incorporar el Oficio N° 584 de fecha 06 de agosto de 2019, emitido por la Dirección del tránsito de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, en el que se señala que: *“La Avda. Presidente Ibáñez es una vía “Trocál de la ciudad”, con tránsito bidireccional en una pista por sentido, su calzada es de hormigón en siete metros. Debido a que fuera de su calzada existente hay espacios que aún no se encuentran urbanizados y siendo una zona comercial compuesta mayoritariamente por locales comerciales del rubro automotriz, se estacionan diversos tipos de vehículos. La calle República, es una vía “Local de la ciudad”, la cual tiene dos sectores: a).- Lado Sur desde población 22 de Mayo, vía bidireccional de 7 metros. Se encuentra regulado por señal “Pare”. Debiendo dar preferencia de paso a la Avda. Pte. Ibáñez. b).- Lado Norte Población Pte., Ibáñez, vía unidireccional de 7 metros, permite salir desde la Avda. Presidente Ibáñez, en dos pistas. La Avda. Presidente Ibáñez, lado Poniente altura de calle República, tiene demarcado un paso peatonal “Tipo cebra”. Se adjunta croquis del sector.”*; como **prueba documental N°10** se incorpora el Certificado de defunción de la víctima Sergio Díaz Mancilla, en el que consta que bajo el N°40 del registro del año 2021, de la circunscripción del Registro Civil e Identificación de Frutillar, se inscribió el fallecimiento de Sergio Hernán Díaz Mancilla, ocurrido el 25 de mayo de 2021 a las 07:40 horas, en el Hospital de Frutillar, por insuficiencia respiratoria/estado vegetativo persistente/traumatismo encéfalo craneano; y como **prueba documental N°12**, se incorporó el informe epicrisis de Sergio Díaz Mancilla emitido por el Hospital de Frutillar, de fecha 25 de mayo de 2021.

Se incorporó de igual manera a propósito de corroborar la tesis acusatoria en esta parte, el testimonio del facultativo **José Ignacio Venegas Salinas**, quien en lo pertinente indicó que se desempeña como médico cirujano en el Servicio de Urgencia del Hospital de Puerto Montt, y que en esa condición está prestando testimonio porque en la oportunidad en que sucedieron los hechos, le correspondió atender a Sergio Hernán Díaz Mancilla un paciente que ingresó a dicho servicio el 21 de julio de 2019 en horas de la madrugada. Recuerda que el referido ingresó grave, a la sala de reanimación, venía en estado de coma, con soporte de la vía aérea, esto es entubado, y sin calmantes, lo que le permitía concluir sin dificultad que el problema que tenía dicho lesionado era neurológico, pues ese procedimiento es muy doloroso, imposible de ejecutar sin fármacos pertinentes de sedación. Recuerda que, en la ocasión, también advirtió un hematoma con asimetría de cráneo, estaba cubierto de apósitos, había una malformación a nivel parietal, probablemente una fractura. Afirma que en realizó un soporte de la vía aérea, una sedación, analgésica. Lo mantuvo en la sala de reanimación alrededor de 20 minutos, el paciente luego de estabilizarse en el servicio de urgencia fue derivado a la UCI. En relación al pronóstico del paciente, fue difícil pues estaba en coma, pero su pronóstico era grave, ya que, un coma neurológico secundario a una lesión, es grave. Cuando el cerebro funciona bien, reacciona ante estímulos, como el dolor, pero en este caso, eso no ocurría.

En el mismo sentido debe ser considerado el testimonio del facultativo, **Tomás Pérez-Luco Alarcón**, quien en lo pertinente señala que en su calidad de médico general, trabaja en el Hospital de Frutillar desde 2018, y que sabe que está declarando pues fue él quien hizo la epicrisis de don Sergio Díaz Mancilla, quien sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en estado vegetativo permanente, por un daño axonal difuso, se le alimentaba al estómago y respiraba por el cuello. Agrega que debido a su estado de postración, tuvo montones de eventos infecciosos, hasta que al final una infección urinaria grave por un organismo resistente a todos los antibióticos disponibles le ocasionó la muerte. Refiere que este paciente les llegó derivado desde el hospital de Puerto Montt, pues necesitaban despejar camas, para pacientes más complejos. Explica que el daño axonal es un daño por TEC grave que importa un daño de todo el cerebro grave, el paciente no se comunicaba, y solo cuando en algunos momentos al infectarse se mostraba más inquieto. Explica que Estado vegetativo, es un estado de inconciencia, en que se mantienen los ciclos de sueño, pero no se comunica, no emite señales, pero a diferencia del coma, mantiene los ciclos de sueño. Señala que estos pacientes que han permanecido un largo tiempo en unidades de



emergencia, hacen infecciones, porque son colonizados por diferentes microorganismos o bacterias, que existen en esos lugares, y en el caso concreto, como estaba postrado, no tenía un buen estado de higiene por su poca movilización, su sistema inmunológico estaba muy disminuido pues estaba con una insuficiencia de alimentación severa y muy bajo peso, todo ello generó el cuadro que determinó su muerte.

Debe desde la perspectiva de la medicina, ser considerado en esta parte el testimonio del facultativo **Luis Felipe Schwerter Poblete**, quien declaró al tenor del informe de autopsia PM-T-212 de fecha 24 de julio de 2019 del Servicio Médico Legal de Puerto Montt, realizado a la víctima Soledad del Carmen Ruiz Baldovinos, indicando en lo pertinente que el día 22/7/19, a las 10:00 horas, practicó en el servicio, por solicitud de la Fiscalía, la autopsia médico legal a un cadáver de sexo femenino, remitido por la Quinta Comisaría de Carabineros de Puerto Montt. Al examen externo señala que se trataba de una persona adulta, de sexo femenino, endomórfica obesa, de 160 cm de estatura, piel blanca, que presentaba livideces violáceas desplazables en plano posterior del cuerpo, rigidez cadavérica parcial y generalizados, equimosis pequeñas en cara anterior y posterior de ambas piernas y también en tercio inferior de ambos muslos. Amplia herida contusa en cara postero-interna de pierna derecha de aprox. 20 cm. en tercio medio con fractura de tibia y peroné en tercio inferior. También herida contusa en cara externa de pierna izquierda tercio inferior de aprox. 4 cm. Concluye que se trata de un cadáver de sexo femenino, de 54 años de edad, identificado como Soledad Del Carmen Ruiz Baldovinos, que la causa de muerte fue un politraumatismo esquelético y visceral, que las lesiones encontradas son recientes, vitales, necesariamente mortales, compatibles con Atropello.

Desde la perspectiva de las dinámicas del accidente, se incorporó el informe pericial del perito investigador de accidentes de tránsito de la Siat de Carabineros, **Diego Hernández Escudero**, quien declaró en relación al informe técnico pericial N° 75-A-2019, y las 17 fotografías que lo componen, además de un plano recibido con fecha 06 de Septiembre de 2019 e informe N° 22-E-2019, indicando en lo pertinente respecto del Informe 75-A de la SIAT de Llanquihue, el 21 de julio de 2019, se concurrió a investigar un accidente de tránsito con resultado de muerte. Llegaron al lugar en presidente Ibáñez donde se pudo verificar en el lugar, la presencia de dos vehículos involucrados y a una persona fallecida en el lugar del accidente. Por los indicios encontrados se determinó que el acusado conducía su vehículo y los participantes 2 y 3 correspondían a la fallecida y el lesionado. La dinámica de los hechos, es que el acusado conducía por presidente Ibáñez, siendo antecedido por estas dos personas que traccionaban un vehículo en la misma dirección, debido al estado de ebriedad del acusado y por no ir atento a las condiciones de tránsito del momento, no advirtió la presencia de las víctimas y ocasionó el accidente. Se logró establecer que la falla del vehículo era de batería. Refiere que en un segundo informe 22-E-2019 del mismo año, en que solicitaban responder si es que el paso desnivel que se encontraba en presidente Ibáñez, afectaba en cuanto a la visual del mismo participante, se pudo establecer que había 143 metros, desde ese lugar al lugar del accidente, por lo que eso no impide ver el diseño vial, ni a los participantes en la vía. Reitera que las razones del accidente, fue el estado de ebriedad del acusado, unido a los demás factores que ya mencionara.

El ministerio público contextualiza la declaración del perito, incorporando como **otros medios de prueba N°5**, mediante su exhibición por sistema de pantalla compartida en la plataforma zoom, un plano contenido en informe técnico N° 75-A-2019, de la SIAT mediante el cual el experto ilustra los desplazamientos de los participantes, en los términos referidos con anterioridad en su exposición, agregando que el vehículo de las víctimas quedó al costado poniente de calle Victoria. La víctima Soledad se encontraba en la parte posterior y el conductor iba en su lado con la puerta abierta dirigiendo el vehículo. Refiere que el punto A en el plano, se usó como punto fijo, para establecer la velocidad aproximada, a la que se desplazaba el móvil, determinándose que lo hacía a una velocidad no inferior a 63 km/hora.

En la misma idea el acusador institucional contextualiza la declaración del perito, incorporando como **otros medios de prueba N°7**, mediante su exhibición por sistema de pantalla compartida en la plataforma zoom, un set de 52 fotografías remitidas en informe pericial del sitio del suceso N°397-19 del Laboratorio de Carabineros, las que se condicen con su exposición previa y que detalla pormenorizadamente.

De igual modo en los términos del artículo 333 del procesal, compartiendo pantalla en la plataforma zoom, se incorpora como **otros medios de prueba N°11**, un cd-r 52x, 700 mb, marca master-g, color gris, contenedor de grabaciones de los hechos de la



acusación, en las que es posible advertir la dinámica del accidente, en rigor se advierte unos minutos antes del impacto como las víctimas abandonan una sala de juegos de destreza, y al subir al vehículo que mantenían estacionado a las afueras del lugar, por calle presidente Ibáñez, pasado el paso sobre nivel de avenida Salvador Allende, y en esa circunstancias deciden empujarlo, por lo que lo ubican en Presidente Ibáñez y lo empujan al sector de la población Modelo, el vehículo al parecer según se aprecia tenía un desperfecto eléctrico, pues no llevaba ninguna luz encendida y las víctimas no llevaban chalecos reflectantes, se aprecia que llovía en forma más o menos intensa y se logra apreciar en las imágenes que el acusado a gran velocidad impacta a las víctimas que en esos momentos le antecedían.

Finalmente, en los términos del artículo 333 del procesal, compartiendo pantalla en la plataforma zoom, se incorpora como **otros medios de prueba N°6**, se incorpora un plano incorporado en informe N° 22-E-2019. Diseño vial de presidente Ibáñez, y paso nivel, es que se señaló como fiscalía en la diligencia, desde allí hay 143 metros hasta la zona de impacto, desde el paso nivel al hito. Explica que el acusado no realizó ninguna maniobra evasiva,

Contrainterrogado por la defensa, señaló que si no se carga la batería no enciende ninguna de las luces del auto. No recuerda cuando comienza la vigencia del chaleco reflectante, pero sí que estaba vigente al momento de ocurrir los hechos. Recuerda que la exigencia de los chalecos reflectantes, data del 3 de julio de 2014, al 2019, llevaba 5 años de vigencia. Al estacionamiento y detención de los vehículos y medidas de seguridad quienes conducen vehículos motorizados deben usarlos. Dentro de las exigencias a quienes conducen, está también la utilización de triángulos, la ley establece la prohibición a todos los conductores de abrir las puertas cuando el vehículo está en movimiento, la ley establece que las puertas deben estar cerradas y antes que abran la puerta no implique entorpecimiento para terceros, y de acuerdo el art. 70 de la ley de tránsito, los vehículos deben contar con elementos retro reflectantes, no tenían antes la tercera luz de freno.- Acota que en el segundo video, en el minuto 04:01:43 – allí se aprecia que el acusado frena pues se enciende la tercera luz de freno, del vehículo que este conducía.

Finalmente, aunque forma parte de la teoría del caso de la defensa, y punto principal de su tesis exculpatoria debe ser considerado en esta parte el testimonio de **Marco Antonio Montoya Salgado**, Ingeniero de ejecución en prevención de riesgo y perito especialista en accidentes de tránsito, quien expuso al tenor del contenido de Informe técnico de accidente de tránsito evacuado para esta causa del 22 septiembre 2021, quien en lo pertinente indicó que analizó todos los antecedentes que están en la carpeta investigativa. Los informes de la SIP, el informe de la SIAT y un informe de Labocar y tuvo a la vista además tres videos. Afirma que analizó el accidente y para ello hizo un prólogo, en orden a establecer que un accidente se debe ver desde todas las aristas de un accidente de tránsito, y en este sentido puede concluir que en el informe de la Siat hay varios errores. Agrega que concurrió el 20 de enero de 2020, a medir el ancho de las calzadas en el sector en que ocurrieron los hechos; y el 01 de septiembre de 2020 fue de noche a ver el lugar a las 20:00 horas. Explica que esto se debe hacer siempre, porque las cámaras de video y fotográficas amplían la visión y pueden llevar a conclusiones equivocadas. Señala como lugar del accidente a unos 16 a 17 metros antes de llegar a avenida República. Refiere que la SIAT dice que el acusado tenía una buena visual, estaba nublado había una llovizna breve y había luz artificial. El que hace el informe no considera las declaraciones de testigos, el señor Triviño, dice que llovía muy fuerte y que no había alumbrado público, el oficial investigador solo refiere que hay luz artificial, no diciendo que es eficiente o ineficiente, según su apreciación, es ineficiente. El segundo error en que incurre es que afirma que el vehículo que fue impactado antecedía el del acusado, pero ello no es efectivo, pues en la práctica, dicho vehículo estaba prácticamente detenido. Y en tercer lugar no considera las infracciones cometidas por las víctimas. Su conclusión es que es que las víctimas se exponen al riesgo de accidente al permanecer en la calzada sin ningún elemento reflectante, ni luces del vehículo, por lo que el chofer del móvil, (vehículo del causado) solo quedaba entregado a las luces bajas del vehículo. Explica que para sus conclusiones se ha tomado en cuenta, la alcoholemia del acusado, pero el accidente se produce por la exposición al riesgo de las víctimas y que cualquier conductor conduciendo el vehículo del acusado, aún sin haber consumido alcohol, igual se hubiese producido el accidente. Refiere que el oficial investigador no hace un análisis de las variables, es importante preguntarse si las víctimas eran vistas por los demás vehículos que pasaban por la ruta. Indica que el oficial investigador tampoco señaló si los focos traseros eran reflectantes o no, y si estos estaban sucios o no, la patente que siempre es reflectante a las luces, iba cubierta



por una de las víctimas que en esos momentos empujaba el vehículo desde atrás. Explica que el chofer –el acusado– se encuentra con la víctima en dos segundos. Señala que la distancia para ver a los sujetos es de 143 metros, según se pudo determinar conforme al diseño vial, y a esa velocidad no alcanzaba a frenar. Acota que el oficial tiene un problema conceptual, porque efectivamente de día se puede ver a 140 y algo de metros, pero el funcionario no considera que el vehículo va con luces bajas de noche, y con ellas, no se ve más allá de 35 a 40 metros, por lo cual en su mismo informe dice que necesita de 67 metros para detenerse, y si se hubiese estado desplazando, a 50 km/ hora necesitaba 41 metros. Explica que reconocer el riesgo, tomar la decisión y realizarla, demora dos segundos. Como sería encima esa maniobra, el impacto es frontal-frontal, el tiempo no le da para realizar ninguna otra maniobra. Y en cuanto a que no hay marcas de frenado, ello se debe a que estaba lloviendo, y allí no se ven de inmediato hay que esperar que se seque el pavimento y buscarlas. La defensa contextualiza la declaración del perito incorporando un set de 51 fotografías que integran la pericia. Imágenes de las cuales el experto se hace cargo, y detalla, conforme a los pormenores que pueden recogerse del registro de audio, pero que en términos simples, busca reiterar y reforzar sus conclusiones en orden a que la responsabilidad del accidente corresponde a las víctimas pues se impusieron imprudentemente a un riesgo que ellas generaron, al empujar un vehículo motorizado sin chaleco reflectantes, lo que por las condiciones de tránsito del momento y la escasa visibilidad puesto que en el lugar las luminarias son deficientes, importan que la ebriedad no es determinante en la causación del accidente sino que la causa basal son las que indicara. Reitera de igual modo que conforme a los videos que pudo tener a la vista, se advierte que el único vehículo que enfrenta una situación similar es uno que se incorpora viniendo de una calle que intercepta a presidente Ibáñez y por ello es que ve a las víctimas, pero en el tránsito de desplazamiento en que se produjo el impacto, con un conductor a 50 km/hora y sin conducir en estado de ebriedad los hechos ocurren de la misma forma.

Fáctum no discutido

DUODECIMO: Que el conjunto de elementos de juicios incorporados en la audiencia permiten tener por establecido sin dificultad, buena parte de los hechos atribuidos en la acusación fiscal al acusado y respecto de los cuales no hubo reparos por la defensa técnica, y que por lo demás el mismo imputado reconoció al momento de prestar testimonio en la oportunidad prevista en el artículo 326 del procesal.

En efecto, se puede tener por hechos concurrentes, debidamente corroborados por la prueba de cargos relacionada en forma previa, los siguientes:

1.- Que el día 21 de julio del año 2019, alrededor de las 4:00 horas, el acusado condujo con una dosificación alcohólica de 1,48 gramos por mil de alcohol en la sangre, a una velocidad no inferior a los 63 km/hora, el automóvil marca Samsung modelo SM3 patente CJDY-35, por Avenida Presidente Ibáñez, de esta ciudad.

2.- Y que en la dinámica descrita en forma previa, al llegar a la altura de Calle República, el acusado no advirtió la presencia y proximidad del automóvil marca Daewoo, modelo Lanos, patente VH-8595, que en esos momentos era empujado por las víctimas Soledad Ruiz Baldovinos y Sergio Díaz Mancilla, a quienes atropelló al impactar el móvil con dicho vehículo.

3.- Que el vehículo que era empujado por las víctimas había tenido un desperfecto eléctrico, al parecer una panne de batería, que lo mantenía sin luces, y que ambas víctimas ejecutaban las acciones de tracción, sin portar los chalecos reflectantes, obligatorios según la ley del tránsito.

4.- Que a consecuencia de las acciones ejecutadas por Barría Barría, Soledad Ruiz Baldovinos falleció en el lugar, producto de un politraumatismo esquelético y visceral, lesiones compatibles con el atropello sufrido, recientes, vitales y necesariamente mortales. En tanto, Sergio Díaz Mancilla, resultó con lesiones graves entre otras, Tec grave Scalp cuero cabelludo, politraumatismo, quedando postrado, sin poder valerse por sí mismo y sin pleno uso de sus facultades mentales.

Los hechos precedentes establecidos encuentran su corroboración en los elementos de juicio ya relacionados, y sobre ellos por lo demás no existe discusión entre acusadores y defensa, por lo que se deben tener como suficientemente satisfecha su acreditación en el estándar que el legislador impone.

Fáctum discutido

DECIMOCUARTO: Que los presupuestos fácticos discutidos en la audiencia, dicen relación con la infracción atribuida como teoría exculpatoria por la defensa a

JAIME ANIBAL ROJAS MUNDACA
Juez oral en lo penal
Fecha: 26/03/2022 12:56:13



las víctimas, que en el orden normativo no pueden ser puestas en duda, desde que las reglas que demanda efectivamente obligan a portar chalecos reflectantes y a desplazar un vehículo en emergencia con la suficiente advertencia de luminosidad. Ahonda el perito de la defensa en estas omisiones de las víctimas y en las condiciones de luminosidad y de escasa visibilidad si se está atento al alumbrado público según el deficitario, desmitificando la visibilidad que ofrecen los videos incorporados como elementos de juicio por el acusador institucional, indicando que las cámaras de video como las fotográficas ofrecen una visibilidad mejorada en relación al ojo humano.

Como fuere, lo que realmente sucede en la especie, aun concediendo todas las premisas que demanda la defensa para sortear con éxito su hipótesis exculpatoria, es que haya existido absoluta imposibilidad de visibilidad por parte de los conductores que circulaban por presidente Ibáñez en la ocasión en que ocurrieron los hechos atribuidos. No obstante las imágenes incorporadas por las cámaras de seguridad que fueron exhibidas en la plataforma virtual, permiten advertir sin ambages que al menos un vehículo sortea sin problemas el supuesto obstáculo que representaban las víctimas empujando su vehículo por calle Presidente Ibáñez, a lo que se debe sumar los dichos del testigo Triviño Andler, quien apenas segundos después, pero viniendo en sentido contrario es capaz de ver el vehículo que con las luces apagadas se desplazaba por dicha arteria, realizando incluso una maniobra evasiva según expresa. Estas alternativas no hacen sino desvirtuar, la tesis que se pretende imponer en orden a que las infracciones reglamentarias en que incurrieron los lesionados son las que determinaron la precipitación de los hechos. De este modo entonces, deviene sin dificultad que el estado de ebriedad en que Barría Barría conducía su vehículo en esa madrugada, es el que necesariamente desencadena los desgraciados hechos que nos ocupan, es el estado de ebriedad en el que conducía el vehículo en el que se desplazaba el que le hizo ignorar las condiciones del tránsito del momento, visibilidad escasa, alumbrado deficiente, lluvia intensa, y como colofón exceso de velocidad, cada una de las alternativas que la misma defensa material y técnica ha pretendido imponer como presupuestos de sus tesis exculpatoria son los que contribuyen a la corroboración de la responsabilidad del agente en los hechos imputados.

Valga decir entonces, que la atribución de los resultados lesivos derivados del accidente, guardan concordancia con las infracciones que se vienen mencionando, esto es, conducir en estado de ebriedad, no atento a las condiciones del tránsito del momento y a exceso de velocidad en zona urbana, se debe tener presente para ello, tal como lo sostienen Contreras y García¹⁴, que el tránsito vehicular es un sistema institucionalizado de interacción que busca maximizar la libertad y la capacidad de traslado de personas y bienes garantizando, al mismo tiempo una interacción segura. Se trata entonces, y en lo que aquí nos interesa, de una interacción humana, en tanto se está frente a la participación simultánea de personas que asumen distintos roles en la circulación vial, utilizando o disputando un mismo espacio público o privado de vías de tránsito, que tiene como característica principal, en primer término, y en lo que nos concierne, la disputa por un mismo espacio físico, de lo cual surge la necesidad de regular la distribución del mismo, interacción y disputa por el espacio, que genera, al intervenir vehículos motorizados, riesgos recíprocos para intereses individuales y sociales, riesgos que se toleran en razón al beneficio que entrega la movilidad de personas y mercaderías, pero que por tratarse de una interacción riesgosa, se tolera organizándola en un sistema institucionalizado fijando o asignando espacios de interacción libre – circulación en determinado sentido, ciclovías, etc- estableciendo además deberes de control y asignando responsabilidades, como por ejemplo respetar el derecho preferente de paso. Corolario de lo que se viene diciendo es la ley 18.290, que es el conjunto normativo en que se encuentra institucionalizado el tráfico vehicular en nuestro país. Este cuerpo normativo otorga amplias esferas de libertad de acción, limitada por una serie de mandatos y prohibiciones.

En el caso que nos ocupa, la regulación institucionalizada del tránsito por las vías de la república demanda que se conduzca a una velocidad que no exceda los 50 km/hora en zona urbana, como lo es, el sector donde ocurrieron los hechos, y que el conductor esté atento en todo momento a las condiciones del tránsito del momento, considerando los pormenores externos como clima, alumbrado, visibilidad, etc. En el sentido que se viene exponiendo, la determinación del riesgo permitido, que por cierto el acusado excede, cumple la función de distinguir los peligros creados que son relevantes penalmente de aquellos que no lo son.

¹⁴ **Contreras y García:** “Caso Atropello de Johnny H” en “Casos Destacados Derecho Penal-parte general” directora Tatiana Vargas Pinto p. 77 y ss. Thomson Reuters-2015. a quienes hemos seguido en esta parte.



Que en el contexto que se relaciona, y teniendo en consideración la naturaleza jurídica del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, según lo que ya se anotara en forma previa, esto es, un delito de peligro concreto, y calificado por el resultado, habiéndose producido en la especie el resultado que tiene un efecto agravatorio en relación a la penalidad asociada al delito base, y que dicho resultado corresponde a un riesgo creado por el autor, el que también le resulta imputable subjetivamente desde que tenía conocimiento que conducía en estado de ebriedad y que además que debía conducir en zona urbana a una velocidad inferior a los 50 km/hora, y sin advertir las condiciones periféricas de la ruta, lluvia, escasa visibilidad, o alumbrado deficiente, permiten derivar que el acusado ha incurrido en las conductas atribuidas y derivar su participación en calidad de autor en el delito de conducción en estado de ebriedad causando muerte y lesiones, lo que así será declarado en la parte resolutive de este acto jurisdiccional.

Hechos acreditados

DÉCIMO QUINTO: Que de esta forma podemos concluir que con el mérito de la prueba producida e incorporada al juicio, apreciada en forma libre por el Tribunal, pero respetando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, y los conocimientos científicamente afianzados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, se pudo establecer que el día 21 de julio del año 2019, alrededor de las 4:00 horas, Excequiel Gonzalo Barria Barria, condujo en estado de ebriedad, sin ir atento las condiciones de tránsito del momento, el automóvil marca Samsung modelo SM3 patente CJDx-35, por Avenida Presidente Ibáñez, de esta ciudad, a una velocidad no inferior a 63 km por hora, dinámica en la que al llegar a la altura de Calle República, no advirtió la presencia y proximidad del automóvil marca Daewoo, modelo Lanos, patente VH-8595, que lo antecedió, colisionándolo por alcance, atropellando a Soledad Ruiz Baldovinos y Sergio Díaz Mancilla, quienes en esos momentos traccionaban dicho móvil.

A consecuencia de las acciones ejecutadas por Barria Barria, Soledad Ruiz Baldovinos falleció en el lugar, producto de un politraumatismo esquelético y visceral, lesiones compatibles con el atropello sufrido, recientes, vitales y necesariamente mortales.

En tanto, Sergio Díaz Mancilla, resultó con lesiones graves entre otras, Tec grave Scalp cuero cabelludo, politraumatismo, quedando postrado, sin poder valerse por sí mismo y sin pleno uso de sus facultades mentales.

La ebriedad del acusado, fue constatada por personal policial, al advertir que este presentaba un fuerte aliento etílico, rostro congestionado e incoherencia la hablar, indicios que fueron corroborados por los exámenes respiratorios y sanguíneos que registraron 1,09 y 1,48 gramos por mil de alcohol en la sangre, respectivamente.

Antijuridicidad

DÉCIMO SEXTO: Sin perjuicio de los hechos que se han tenido por acreditados, y con ellos la tipicidad objetiva y subjetiva que se adelantara, no es menos cierto, que en doctrina, la tipicidad solo es indiciaria de la antijuridicidad, por lo que deberá determinarse en concreto, si en la especie, las acciones desplegadas por Barria Barria, se encuentran amparadas por una causal de justificación o bien su accionar ha resultado derechamente antijurídico, entendiendo por antijuridicidad, como *aquel disvalor de que es portador un hecho típico que contradice las normas de deber contenidas en el ordenamiento jurídico*.¹⁵

Que aun cuando en la especie, la defensa en sus alegatos de apertura y clausura, no ha puesto en discusión que su defendido haya ajustado sus acciones al ordenamiento jurídico por estar amparado por una causal de justificación, de todos modos el tribunal, tampoco lo ha advertido, pues de cierto es, que no se incorporó prueba alguna que así permitiera tenerlo por establecido.

De este modo, no habiendo sido alegada ni concurriendo en la especie, causal de justificación alguna, solo puede predicarse respecto a las acciones del agente, el carácter de antijurídicas.

Calificación jurídica

DECIMO SÉPTIMO: Que los hechos que ha tenido por acreditado el tribunal, en cuanto importan que una persona condujo en estado de ebriedad un vehículo motorizado, causando la muerte de Soledad Ruiz Baldovinos y lesiones graves gravísimas en la persona de Sergio Díaz Mancilla, importan la comisión de un delito consumado de

¹⁵ Cury, ob. cit. p. 353. La afirmación de la ilicitud es el resultado de un juicio en virtud del cual se declara que la conducta típica, es contraria a los valores reconocidos por la norma.



Conducción de Vehículo Motorizado en Estado de ebriedad causando muerte y lesiones graves gravísimas, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación al artículo 110 inciso segundo de la ley 18.290 y 397 N°1 del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el día 21 de julio de 2019.

Participación

DÉCIMO OCTAVO: Que no obstante no encontrarse discutida la participación del acusado en los hechos que ha tenido por establecido el tribunal, considerando que el mismo reconoce total y plenamente su participación en los hechos, ésta se encuentra acreditada, también, a lo menos con los mismos antecedentes que han servido para tener por establecido el hecho típico y antijurídico ya referido, conforme a lo que latamente se ha expuesto, debiendo considerarse especialmente la incriminación directa que a su respecto formulan los funcionarios policiales que intervinieron en la investigación, antecedentes a los que deben unirse los hallazgos científicos vinculados a las pericias planimétricas y fotográficas vinculadas al informe de la Siat, incorporado por el testimonio del experto Hernández Escudero.

De este modo, el conjunto de incriminaciones directas e indirectas, debidamente complementadas y contextualizadas con la demás prueba producida durante la audiencia de este juicio oral, ha logrado superar la presunción de inocencia, que amparaba al acusado, permitiendo conducir al Tribunal a la convicción -más allá de toda duda razonable - de que a éste, le ha correspondido participación en calidad de autor del delito consumado de Conducción de Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad causando muerte y lesiones, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación al artículo 110 inciso segundo de la ley 18.290, perpetrado en esta ciudad el día 21 de julio de 2019, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, por haber tomado parte en los mismos de una manera inmediata y directa.

DECIMO NOVENO: Que habiéndose hecho referencia en el fallo, a la declaración del acusado, como elemento probatorio, es necesario señalar, que si bien el Código Procesal Penal, regula el testimonio de los imputados como *medio de defensa*,¹⁶ erradicando con ello, dicha declaración como medio de prueba, confesión en la especie, *nada impide que, en la medida que el acusado reconozca en el juicio parte o la totalidad de los hechos que le son imputados, el tribunal valore sus dichos como prueba*. Lo anterior encuentra su sustento, en el artículo 295 del estatuto Procesal, en cuanto dispone, que todos los hechos y circunstancias pertinentes para la solución del caso *pueden ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley*, medios que, a su turno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del citado texto, *pueden ser valorados con entera libertad*, siempre que no se contradigan los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Asimismo, el artículo 340 inciso final del mencionado estatuto, establece que nadie puede ser condenado con el solo mérito de su propia declaración, de lo que deviene necesariamente, que la ley prevé la posibilidad de otorgar valor a la declaración del acusado, con la limitación de que ésta, por sí misma, no sostenga una sentencia condenatoria.

Culpabilidad

VIGESIMO: Que establecido en el caso de marras, la tipicidad objetiva y subjetiva de los acontecimientos, como la antijuridicidad de las acciones ejecutadas por el acusado, ello no basta para ejercer sobre el autor, el ius *puniendi* estatal, sino que se debe establecer su culpabilidad, esto es, que se le pueda reprochar su actuar, porque en definitiva pudo haber ajustado su comportamiento al ordenamiento jurídico y no lo hizo.

Condictio sine qua non para ser declarado culpable es tener la calidad de imputable, es decir haber tenido la capacidad de haber comprendido al momento de los hechos, las acciones que ejecutaba, y haber dirigido sus actos conforme a esa comprensión, la exclusión de imputabilidad debe verificarse conforme a las reglas generales con la acreditación de alguno de los presupuestos que regulan el artículo 10 del Código Penal. Sin embargo, estos juzgadores, conforme a la prueba incorporada en audiencia, no han logrado establecer ninguna de dichas causales, las que tampoco fueron alegadas por las defensas.

Con todo, no basta con que el autor sea imputable, sino que además se requiere, que éste comprenda la ilicitud de sus actos, que se entere íntimamente que actúa ilícitamente, requisito que en el caso de conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad causando la muerte y lesiones graves gravísimas, el tribunal lo tiene por concurrente,

¹⁶ De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Penal.



pues los bienes jurídicos involucrados son de notoria protección. Que duda puede existir, que todo individuo de la especie humana, que viva en sociedad, sabe que conducir un vehículo motorizado sin estar en las condiciones óptimas para realizarlo por haber ingerido bebidas alcohólicas, en la dosificación que fue determinada respecto del acusado, es un delito, más aun considerando la infracción reglamentaria en la que incurrió en la ocasión.

De este modo, siendo la base de la ilicitud, de una evidencia elocuente, estos juzgadores concluyen que los actos desplegados por el referido le resultan reprochables, o dichos en forma normativa, conforme a la teoría general, imputables a título de culpabilidad.

Circunstancias modificatorias de responsabilidad.

VIGESIMO PRIMERO: *(Irreproachable conducta)* Conforme al contenido del extracto de filiación incorporado por el acusador institucional, Barría Barría, no presenta en su extracto de filiación anotaciones prontuariales pretéritas, ni en registro general de condenas ni en el registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar, circunstancia reconocida además por ambos persecutores.

En este orden de ideas, Barría Barría, posee una irreproachable conducta anterior, desde que antes de los sucesos que hoy lo mantienen en juzgamiento no había sido perseguido **por el sistema penal**, lo que se encuentra acreditado según se viene diciendo por el documento allegado al juicio, y en esta medida el tribunal es de parecer de reconocer en su favor la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el numeral 6 del artículo 11 del Código Penal.

Adelantemos que el razonamiento decisorio en orden a estimar como concurrente la atenuante en referencia, no transita el convencimiento de *atribuir significado a la personalidad del sujeto para la determinación de la punibilidad*, pues, a priori, la referencia a dicho estado personal **vulneraría el principio de culpabilidad**; sino que su fundamento se encuentra en la relación de la personalidad anterior irreproachable del agente con el acto y las circunstancias de éste.

En efecto, de acuerdo a lo sostenido por el profesor Cury,¹⁷ la base de la atenuación es un *indicio de exigibilidad disminuida deducida de la conducta anterior irreproachable*, que permite suponer, que la ejecución delictual devino de *circunstancias extraordinarias que conmovieron su capacidad de autodeterminarse, o lo que es lo mismo, de una situación anómala que la perturbó*". La conclusión fluye necesaria si se asienta que antes de los eventos que se juzgan, el acusado siempre había subordinado sus acciones al imperio del derecho.

Finalmente, solo indicar que la literalidad normativa, exige una conducta anterior irreproachable, esto es, exenta de tacha, ello **es un requisito simplemente negativo**, y por lo tanto no es preciso acreditar que el sujeto ha conducido sus acciones en la vida, de una manera justa o prudente, pues ello implica una actividad positiva en el sentido del bien, que la norma no demanda.

Lo relevante a título de punición, es que Barría Barría, haya desarrollado las acciones de conducir en estado de ebriedad un vehículo motorizado causando la muerte y lesiones de las personas que ha tenido por concurrente el tribunal, ejecución delictual, que no precedida de acciones penales anteriores, permiten asentar que ellas devinieron de *"circunstancias extraordinarias que conmovieron su capacidad de autodeterminarse, o lo que es lo mismo, de una situación anómala que la perturbó"*; cualquier otra alternativa, es simple y puro derecho penal de autor, que resulta inadmisibles a la luz de un derecho penal liberal en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, que obsta a darle significación a la personalidad del agente, y obliga a construir la atenuación del numeral 6 del artículo 11 del sustantivo, en relación a la personalidad anterior del agente **con el acto y las circunstancias de éste**.

Que los fundamentos relacionados con precedencia, resultan suficientes, para estimar que la conducta anterior del acusado es irreproachable, favoreciéndole en consecuencia, la atenuante de responsabilidad criminal alegada en esta parte por la defensa.

VIGÉSIMO SEGUNDO: *(Colaboración Substantial)* Que en relación a la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, invocada a favor del acusado, la discusión se centró en los presupuestos fácticos sobre los que la hace descansar la defensa y la posición que mantuvieron respecto de ella los acusadores, en su

¹⁷ Cury Urzúa: "Derecho Penal, Parte General", Ediciones Universidad Católica de Chile, 8° edición ampliada, septiembre 2005.- pp. 489-490.



propuesta de rechazarla por considerar insubstancial e irrelevantes los aportes efectuados por el acusado desde que los hechos atribuidos es posible derivarlos de los demás elementos de juicio incorporados en la audiencia.

En este contexto se debe tener presente al momento de resolver el asunto que la base de la atenuante se encuentra en el carácter sustancial o determinante que dichas acciones deben tener, análisis al que debe añadirse la oportunidad en que la supuesta colaboración se ha prestado y la dinámica de las acciones desplegadas por el agente con posterioridad a la comisión del ilícito, en relación a la labor investigativa y de persecución penal y la propia audiencia de juicio oral.

A las circunstancias fácticas descritas, se debe agregar algunas consideraciones dogmáticas, como es, que la norma en cuestión fue modificada en su redacción primitiva, a fin de adecuarla al nuevo proceso penal, ya que la anterior, según puede recordarse exigía para su consideración que “*Contra el procesado no existieran otros antecedentes que su espontánea confesión*”, expresiones que la tornaban prácticamente inaplicables en el anterior sistema, e inviable en el actual, por no constituir la declaración del acusado, un medio de prueba, sino un medio de defensa, según aparece del artículo 98 del Código Procesal Penal. Como fueron las cosas, la decisión legislativa, apunta a significar que la alteración al régimen normal de penalidad, que permite esta morigerante, descansa **sobre un elevado estándar de colaboración**, determinante si se quiere, pero bajo ningún concepto, se ha pretendido indicar que ella deba erigirse como la única o elemental prueba, en contra de quien coopera, sino que su sustancialidad debe ser establecida, a la luz de las demás probanzas reunidas, como de la naturaleza, accidentes y circunstancias fácticas del hecho concreto que es sometido a decisión del Tribunal, y la oportunidad en que ha sido prestada según se viene diciendo.

Que a las consideraciones objetivas que se han consignado, se debe agregar obligatoriamente la perspectiva de la fundamentación última de la atenuación, debiendo contextualizarse en su íntima conexión con las atenuantes de responsabilidad criminal contempladas en los numerales 7 y 8 del artículo 11 del estatuto punitivo, en cuanto todas, extraen su contenido fáctico del *comportamiento posterior del delincuente*, y que se vinculan en el caso del actual numeral 9, a razones de política criminal vinculadas a la acción de la justicia que se ve favorecida con la cooperación prestada por el infractor.¹⁸

En este orden de ideas, se deben asentar como hechos de la causa, sobre los cuales debe construirse o desecharse la consideración de la atenuante alegada por la defensa, que en el núcleo esencial de la conducta, el acusado reconoció su participación en los hechos, no solo en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal penal al aperturarse el juicio, sino que ya lo había efectuado apenas ocurrieron los hechos, desde que en efecto, el acusado accedió a practicarse tanto los test respiratorios como de sangre para la determinación de la graduación alcohólica con la que conducía al momento de ocurrir los hechos, reconociendo además el haber conducido a exceso de velocidad o al menos, sin haberlo cuestionado. Y si bien es cierto, el acusado se encuentra amenazado legalmente por la figura del artículo 195 bis de la ley 18.290, bajo pena de multa en caso de negarse injustificadamente a someterse a las pruebas respiratorias u otros exámenes científicos destinados a establecer la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el cuerpo, previstos en el artículo 182 de la misma normativa, se omitieron en el contrainterrogatorio respectivo, el verificar los motivos que tuvo el agente para tolerar dichas acciones investigativas de la policía y que junto al examen de sangre respectivo, generaron prueba de cargo en su contra. Así las cosas, la única conclusión posible en este sentido, es aquella a la que nos invita la defensa, en orden a asumir que lo realizó en pos del esclarecimiento de los hechos, lo que unido a la circunstancia indubitada que dichos antecedentes han sido considerados como prueba de cargo en contra del referido, ubican a dichas acciones en el marco legal que permite derivar de dichos actos, una intención de colaborar en la investigación que en esos momentos se desarrollaba. Como si lo anterior no bastara, se deberá coincidir con estos juzgadores, en orden a que el acusado, también ha reconocido la infracción reglamentaria que determinó las consecuencias lesivas que ha tenido por acreditadas el tribunal, y no solo la voluntariedad de dicha conducta, sino además agregando el elemento cognitivo de la misma, desde que de igual modo ha sostenido que conducía a su domicilio y que el camino lo conocía. Las alternativas

¹⁸ En este sentido, **Labatut**, Derecho Penal Tomo I, p. 216 y 217, Editorial Jurídica de Chile, 9ª edición – 2002; **Garrido Montt**, en Derecho Penal, parte general Tomo I, p. 192 y siguientes; y **Jean Pierre Matus** en Texto y Comentario del Código Penal Chileno Tomo I, p. 182, Editorial Jurídica de Chile 1ª edición 2002, de Politoff y Ortiz Quiroga.



que se anotan, reconocidos en la oportunidad prevista en el artículo 326 del procesal, ha dejado la discusión del asunto, y la decisión del caso, en el ámbito normativo alegado por la defensa técnica, a la sazón, que los resultados producidos por dichas acciones no le resultan atribuibles por ausencia de una relación de riesgo, que debería concurrir en la especie o bien pretender que se les tratara como un concurso entre conducción en estado de ebriedad y delito culposos respectivamente.

Así las cosas, teniendo en consideración la decisión del tribunal, las acciones de colaboración descritas, constituyen normativamente haber reconocido el hecho punible y la participación que le cupo en el mismo y en esta medida haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos y estimar como concurrente la atenuante invocada, la que así será reconocido al momento de determinar el quantum que se asigne en definitiva.

Determinación de la pena

VIGÉSIMO TERCERO: Que a fin de determinar el rango de la penalidad que resulta aplicable al caso concreto, los juzgadores han de tener presente, la pena señalada por la ley al delito, su grado de ejecución, la forma de participación en el establecida, las circunstancias modificatorias de responsabilidad concurrentes, y la extensión del mal producido por el delito.

Que se ha determinado, en relación al acusado, que a éste, le ha correspondido participación en calidad de autor en un delito consumado de Conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte y lesiones graves gravísimas, ilícito que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 196 inciso tercero de la ley 18.290, recorre la sanción de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, debiendo aplicarse también las penas de multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal.

Que de igual modo se ha de tener en consideración al momento de establecer la sanción a imponer, la regla complementaria conocida en doctrina como “marco rígido” y que se ajusta a lo dispuesto en el **numeral 2 del artículo 196 bis** del cuerpo normativo en referencia, esto es, *“Para determinar la pena en los casos previstos en los incisos tercero y cuarto del artículo 196, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal y, en su lugar, aplicará las siguientes reglas: 2.- Si, tratándose del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196, concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo.”*

Que del mismo modo se ha establecido, que respecto de Barria Barria, concurren dos circunstancias atenuantes de responsabilidad sin que le perjudique agravante alguna, por lo que, teniendo en consideración las reglas concurrentes al momento de regular el quantum corporal, y pecuniario de la sanción, estos juzgadores podrán recorrer el grado fijado por el legislador en toda su extensión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal.

En esta dimensión la parte querellante, hizo comparecer en estrados a los hijos de las víctimas, quienes dieron cuenta del dolor que les ha ocasionado la inesperada muerte de sus padres, sin perjuicio del sufrimiento que padeció antes de morir su padre, quien permaneció postrado durante largo tiempo, sin poder nunca recuperarse.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y atendido además, que no solo se trata en la especie de la muerte de Soledad Ruiz Baldovinos, lo que debe determinar el quantum sancionatorio que se asigne, sino que de igual modo, las lesiones graves gravísimas ocasionadas a Sergio Díaz Mansilla, estos juzgadores aplicaran la sanción corporal en su tramo máximo, esto es, **de cinco años de presidio menor en su grado máximo**, manteniendo las mismas consideraciones para regular la sanción pecuniaria en el rango de doce Unidades Tributarias Mensuales.

Que atendido lo dispuesto en el artículo 196 inciso tercero de la ley 18.290, resulta obligatorio para el tribunal imponer las demás sanciones establecidas en dicha regla, ya que la expresión legal, *“...En ambos casos, se aplicarán también las penas de ...”* solo puede ser entendida como un imperativo para estos juzgadores, y en esta medida se impondrá al acusado la pena de **inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica** y **el comiso** del automóvil patente CJDx-35, marca Samsung, modelo SM3 1.6, año 2011, motor N°QG16332400; chasis N°KNMC4C2HMBP807032, color negro verde, y que según el

JAIME ANIBAL ROJAS MUNDACA
Juez oral en lo penal
Fecha: 26/03/2022 12:56:13



GHXXYRDPXD

Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, propiedad de Excequiel Gonzalo Barria Barria, RUN: 8.461.040-2, inscrito en el repertorio de la circunscripción de Puerto Montt, con fecha 11 de octubre de 2018, bajo el N°17007, todo lo que así será declarado en lo resolutive de esta sentencia.

Que la magnitud de la penalidad que se viene asignando en el caso concreto, tal como lo viene afirmando hace largo rato el Tribunal Supremo Español¹⁹, dota de contenido al concepto de libertad, entendida ésta como una opción valorativa de realización preferente; que equilibra la gravedad de la infracción, con la gravedad de la pena, que se corresponde con la entidad del daño o puesta en peligro de los bienes jurídicamente involucrados en la especie, que considera los efectos de la sanción sobre el condenado, que tiende a cumplir los fines que persigue la pena, humanizando el derecho y respetando el principio de proporcionalidad. Que si bien es cierto, los principios constituyen mandatos de actuación para la realización del contenido de un determinado valor, que está dirigido fundamentalmente al legislador, -como autor normativo- no es menos efectivo, que éste no es su destinatario exclusivo, ya que en virtud del principio de inexcusabilidad contenido en el artículo 76 de la carta fundamental, también los jueces en cuanto intérpretes y aplicadores de la Ley, son responsables de la realización del derecho concreto a través del enjuiciamiento de los casos que le son presentados, y por tanto encargados de la consolidación del cuadro de valores superiores que definen nuestro ordenamiento jurídico, bien que esta vinculación sea derivada y opere a través del sometimiento al imperio de la Ley, no de una manera automática y mecanicista, sino desde el respeto y efectividad de tales valores, más aun considerando que los principios de proporcionalidad y culpabilidad, uno de naturaleza objetivo y el otro subjetivo, constituyen los referentes a tener en cuenta para individualizar judicial, racional y humanamente la pena, en el sentido que esta debe ser la justa compensación al grado de culpabilidad del sujeto y a la gravedad intrínseca del delito, único modo idóneo de recoger los **valores de libertad y justicia** a los que se refieren los artículos 1 y 19 N°7 y 3 de la Constitución Política de la República, el artículo 5 N°3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y particularmente el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pilares normativos sobre los que descansa y comienza a erigirse el principio de proporcionalidad, y que permite en caso de duda, estar por la vigencia del *favor libertatis*, y el **valor justicia**, en cuanto que, en sí mismo, integra la prohibición de excesividad y conecta con la idea de moderación, medida justa y equilibrio a que deben propender los juzgadores.

Penas sustitutivas

VIGÉSIMO CUARTO: La defensa del acusado ha requerido se sustituya la sanción corporal que se disponga por la de libertad vigilada intensiva, teniendo en consideración para ello, que su representado ha dado cumplimiento a las restricciones y requisitos que la regla del artículo 196 ter de la ley 18.290 impone, pues ha permanecido privado de libertad por estos hechos, un tiempo que excede al que demanda el legislador como presupuesto previo para el otorgamiento de dicha sustitución. Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos propios de la ley 18.216, incorporó mediante lectura resumida, el informe social evacuado por la profesional asistente social, **Jeannett Uribe Vargas**, en agosto de 2019, que en lo pertinente señala que el objetivo del peritaje que se le encargara fue determinar la situación familiar, laboral y social de Excequiel Barria Barria, a efectos de establecer la pertinencia de que en su momento le aplicaran medidas cautelares de menor intensidad que la prisión preventiva, y ahora se presenta a fin de la postulación a las penas sustitutivas de la ley 18.216, en este sentido indica que para estos efectos, se entrevistó con el referido, con su pareja doña <<RESERVADO>>, con sus hijos mayores de edad, se constituyó en el domicilio de calle Puerto San Carlos N°4643 Altos de Mirasol en esta ciudad. Vive en ella junto a su familia, residencia que ocupa hace más de cinco años, agrega que ha trabajado en barcos pesqueros en alta mar, como contra maestre, técnico en línea blanca, chofer para la universidad San Sebastián. Concluye que en el ámbito de las relaciones familiares cuenta con una red de apoyo familiar, principalmente por parte de su pareja y sus hijos y demás integrantes de su familia extendida como hermanos y amigos. Que éste se encuentra inserto socialmente, y que en su opinión, éste posee recursos de arraigo familiar y social por cuando forma parte de una familia compuesta por su pareja e hijos, quienes lo han apoyado frente a la situación judicial que enfrenta, posee un domicilio conocido y estable en el domicilio indicado, por lo que resulta recomendable la sustitución de la cautelar

¹⁹ **Tribunal Supremo Español.** Sala 2ª de lo Penal. Resolución: 1948/2002 del 20/11/2002. Recurso 1434, fallo que hemos seguido libremente con las correspondientes adecuaciones a la normativa nacional.



Que tal como se viene diciendo, a priori, la decisión que adoptan estos jueces, en relación a la sustitución de la pena requerida por la defensa, importa en la especie determinar, el cumplimiento del acusado de los presupuestos normativos que la ley 18.216 a dichos efectos impone.

Que de acuerdo a lo previsto en el **artículo 1°** de la ley 18.216, la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga por alguna de las siguientes penas: 1) *remisión condicional de la pena*; 2) *reclusión parcial*; 3) *libertad vigilada*; 4) *libertad vigilada intensiva*; 5) *expulsión de extranjero del país* y 6) *prestación de servicios en beneficio de la comunidad*.

El inciso primero del **artículo 14** del texto legal en mención, sostiene que **La libertad vigilada** consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado.

Por su parte el **artículo 15 bis** de dicha normativa, señala que la **libertad vigilada intensiva** podrá decretarse: “a) *Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco, o b) Si se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 391, 395, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter y 411 ter del mismo Código, y la pena privativa o restrictiva de libertad que se impusiere fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere de cinco años. En los casos previstos en las dos letras anteriores, deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en ambos numerales del inciso segundo del artículo anterior.*”.

Que la regla en su **inciso final**, agrega como requisitos que deberá cumplir el sentenciado cuya pena se sustituya bajo este amparo: “**1.-** *Que el penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena, y 2.-* *Que los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren concluir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social.*”.

Que de acuerdo al mérito de los antecedentes que se han relacionado en forma previa, se puede sostener que el acusado Barria Barria reúne los requisitos señalados en el literal a) y numerales 1 y 2 del artículo 15 aludido. Particularmente respecto de los antecedentes sociales y características de personalidad, como de su conducta anterior y posterior al hecho punible, teniendo en consideración para ello también, las reflexiones que se tuvo en vista para determinar la concurrencia de la atenuante de responsabilidad consagrada en el numeral 9 del artículo 11 del sustantivo.

Valga consignar además, que NO se incorporó por parte de los acusadores antecedente alguno que permita concluir que un tratamiento en libertad aparezca como ineficaz e innecesario para una efectiva readaptación y resocialización del condenado.

De lo que se lleva dicho no puede sino derivarse que Barria Barria presenta características de personalidad que permiten presumir fundadamente un buen pronóstico en torno a su reinserción social y se puede compartir con estos juzgadores que se debe propender, en los casos en que una persona tiene reales posibilidades de reinsertarse en la comunidad y no seguir perfeccionándose en la criminalidad al interior de un penal, la mejor decisión es optar por disponer la ejecución de esa posibilidad en un sistema de cumplimiento alternativo al de la internación en un recinto penitenciario.

Que en consecuencia, se estima que el acusado cumple además de los requisitos que establece el literal a) y numerales 1 y 2 del artículo 15 de la ley 18.216 según ya se ha dicho, con el inciso final del artículo 15 bis de la misma normativa, y en tal medida la pena corporal impuesta, será sustituida por la pena de libertad vigilada intensiva, de acuerdo a lo previsto en los artículos 14, 15, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 quáter, 18, 20, 20 bis, 21, 22, 27 y 32 de la ley 18.216.

Plazo y Plan de intervención

VIGÉSIMO QUINTO: Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la ley 18.216, al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de intervención igual al que correspondería cumplir si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad que se sustituye, por lo que en el caso



concreto **dicho plazo de intervención comprenderá el término de cinco años** de libertad vigilada intensiva.

A propósito del control de la pena sustitutiva que se vienen imponiendo, el delegado que hubiere sido designado para el control de la misma, deberá proponer a éste tribunal, - desde que tal como lo indica el inciso segundo del artículo 16 del cuerpo legal en mención, es el que ha dictado la sentencia - en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, un plan de intervención individual, el que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil. El plan deberá considerar el acceso efectivo de los condenados a los servicios y recursos de la red intersectorial, e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Para los efectos que se vienen relacionando, ejecutoriada la sentencia deberá oficiarse a Gendarmería a propósito que indique el nombre del Delegado de Libertad Vigilada que ha sido designado para el control de la pena sustitutiva impuesta.

Condiciones del artículo 17 de la ley 18.216

VIGÉSIMO SEXTO: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del estatuto en alusión, el tribunal impondrá al condenado **EXCEQUIEL GONZALO BARRIA BARRIA** las siguientes condiciones:

a) Residencia en el domicilio de calle **Puerto San Carlos N°4643, Altos de Mirasol, de Puerto Montt**. La residencia podrá ser cambiada en casos especiales calificados por el tribunal y previo informe del delegado respectivo;

b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el período fijado, debiendo el condenado cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que aquél imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz intervención individualizada, y

c) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención individual, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Requisito del artículo 196 ter de la ley 18.290

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo que se ha resuelto en relación a la pena sustitutiva, a propósito de dar lugar a la petición de la defensa, y plasmar en esta medida la decisión del tribunal en orden a la sustitución determinada, estos juzgadores han de tener en consideración lo dispuesto el **artículo 196 ter de la ley 18.290**, que en lo pertinente señala que. *“Respecto del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado. Con todo, no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad implicará la sustitución o suspensión del cumplimiento de las multas, comiso e inhabilitaciones impuestas.”*

Que, en el caso concreto, el requisito impuesto por la regla en referencia, se encuentra cumplida, conforme da cuenta el certificado del ministro de fe de este tribunal, en cuanto señala que Barria Barria, *“estuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva desde el 21 julio 2019 hasta el 30 agosto 2019, sustituyéndose en esta última data por arresto domiciliario total el que estuvo vigente hasta el día 24 de enero de 2020, fecha en que se dispuso la cautelar de arresto domiciliario parcial, por doce horas, el que se mantiene vigente a la fecha. A la fecha de inicio de Juicio Oral (14 de marzo de 2022) totaliza 968 días de abono, en caso de dictarse sentencia condenatoria.”*

Que conforme a lo anterior, se debe entender por cumplido el requisito que impone el legislador para este tipo de ilícitos, ya que el referido ha permanecido privado de libertad por estos hechos, o lo que es lo mismo ha cumplido ese tiempo de la pena privativa de libertad en forma efectiva, tiempo que en todo caso, **deberá abonársele** al quantum del castigo que se ha determinado a su respecto.

Costas

JAIME ANIBAL ROJAS MUNDACA
Juez oral en lo penal
Fecha: 26/03/2022 12:56:13



VIGÉSIMO OCTAVO: Se eximirá al acusado del pago de las costas de la causa, atendido la facultad que el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11, 12, 14, 15 N°1, 18, 24, 25, 26, 29, 47, 49, 50, y 69 del Código Penal; artículos 110, 193, 196 bis y 196 ter de la ley 18.290; artículos 1, 45, 46, 47, 281, 295, 296, 297, 298, 308, 309, 314, 319, 325, 328, 329, 336, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 346, 348 y 468 del Código Procesal Penal; artículos 1, 5 y 19 N°3 y 7 de la Constitución Política de la República, y artículos 5 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 7 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1 y ss., de la ley 18.216, se declara:

I.- Que se **CONDENA** al acusado **EXCEQUIEL GONZALO BARRIA BARRIA**, ya individualizado, a la pena de **CINCO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo, y **MULTA de DOCE UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, en calidad de autor del delito de Conducción de un Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad causando la muerte de Soledad Ruiz Baldovinos y lesiones graves gravísimas en la persona de Sergio Diaz Mansilla, en grado de desarrollo consumado cometido en esta ciudad el día 21 de julio de 2019.

II.- Que se le condena además, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

III.- Que de igual modo se le condena a la pena de **INHABILIDAD PERPETUA para conducir vehículos de tracción mecánica**, para tales efectos se decreta la cancelación de su licencia de conducir.

IV.- Que se decreta el **COMISO** del automóvil patente CJDx-35, marca Samsung, modelo SM3 1.6, año 2011, motor N°QG16332400; chasis N°KNMC4C2HMBP807032, color negro verde, y que según el Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, propiedad de Excequiel Gonzalo Barría Barría, RUN: 8.461.040-2, inscrito en el repertorio de la circunscripción de Puerto Montt, con fecha 11 de octubre de 2018, bajo el N°17007.

V.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 18.216, y reuniéndose los requisitos del artículo 15 del mismo cuerpo legal, y 196 ter de la ley 18.290, **SE SUSTITUYE** el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado, por la pena de **LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA** por igual término que el de la pena privativa de libertad regulada, esto es, **CINCO AÑOS**, debiendo presentarse el condenado al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, con sede en esta ciudad, en el término de 10 días una vez ejecutoriado el presente fallo, y además cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento.

VI.- Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 18.216, se imponen al condenado Excequiel Gonzalo Barría Barría, las siguientes condiciones:

a) Residencia en el domicilio de calle Puerto San Carlos N°4643 de la población Altos de Mirasol de Puerto Montt. La residencia podrá ser cambiada en casos especiales calificados por el tribunal y previo informe del delegado respectivo;

b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el período fijado, debiendo el condenado cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que aquél imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz intervención individualizada, y

c) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención individual, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

VII.- Que respecto a la pena sustituida, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 16 de la ley 18.216, el delegado que se designe para el control de esta pena, deberá proponer a éste tribunal el plan de intervención individual que la norma regula en el plazo, forma y contenido que ésta dispone, debiendo, además, en su oportunidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley.

Para los efectos que se vienen relacionando, ofíciase al Jefe del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, y una vez conocido el nombre del delegado, requiérasele la oportunidad en que propondrá el plan de intervención individual a fin de procurar la fijación de la audiencia respectiva en la agenda del tribunal.



Si la pena sustitutiva impuesta fuere revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, se la reemplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas.

En cualquiera de estos casos, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y los días que ha permanecido privado de libertad en esta causa, esto es, un total de **novecientos setenta y ocho (978) días**, según da cuenta el certificado del ministro de fe de este tribunal relacionado en los motivos que informan esta sentencia.

Que **NO se condena en costas** al acusado de acuerdo a los fundamentos expuestos en el fallo.

Acordada con la prevención del magistrado Francisco Javier del Campo Toledo, quien compartiendo la decisión de condena estuvo por no dar lugar a sustituir la sanción corporal impuesto, debiendo en su parecer, el acusado, cumplir real y efectivamente la pena impuesta, con los abonos respectivos, haciendo suyos en esta parte los fundamentos fácticos y normativos expresados por los acusadores.

Devuélvase a los intervinientes la prueba incorporada.

Redacción del juez don Jaime Rojas Mundaca y la prevención por su autor.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE en su oportunidad, al Juzgado de Garantía de Puerto Montt para los fines pertinentes, hecho **ARCHÍVESE**.

RIT N° 82-2021

RUC N°1900775276-0

PRONUNCIADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUERTO MONTT, INTEGRADA POR LOS JUECES TITULARES, DON ANDRES VILLAGRA RAMIREZ, DON JAIME ROJAS MUNDACA Y DON FRANCISCO JAVIER DEL CAMPO TOLEDO.

/Fab

JAIME ANIBAL ROJAS MUNDACA
Juez oral en lo penal
Fecha: 26/03/2022 12:56:13

